

POR LA PAZ Y LA JUSTICIA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS: UNA AGENDA BINACIONAL



MPPJ

MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS
POR LA PAZ Y LA JUSTICIA



PMPJ

PEOPLE'S MOVEMENT FOR
PEACE AND JUSTICE

PEACE AND JUSTICE
ACROSS BORDERS: A
BINATIONAL AGENDA

Coordinador del Documento

/ Document Coordinator:

Marco Castillo, Global Exchange

Voceros y voceras de los Foros de Consulta

/ Preparatory Forums for Peace Speakers:

Cristina Bautista, Padres y Madres de Ayotzinapa

Bella D'Allacio, March For Our Lives

Jorden Giger, Black Lives Matter South Bend

Iakowi:he'ne' Oakes, North American indigenous

Center of New York

Odilia Romero, CIELO

Coordinación Logística de Foros y Cumbre por la Paz / Preparatory forums and Peace Summit

Logistics Coordinator:

Fabiola Mancilla

Sistematización de propuestas de foros

/ Notes systematization:

Carla Vargas

Equipo técnico-Metodológico

/ Methodological team:

Alberto Solis-Castro

Rodolfo Cordova

Norma Mendieta

Sara San Martín

Maria Elena Valdivia

José Ugalde

Diseño Editorial

/ Editorial design:

Fósforo

fsfr.mx

MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS POR LA PAZ Y LA JUSTICIA PEOPLE'S MOVEMENT FOR PEACE AND JUSTICE

PLATAFORMAS BINACIONALES CONSTITUYENTES / BINATIONAL CONSTITUENT PLATFORMS:

Co-Redes Negras por la Paz y la Justicia
Black Co-Networks for Peace and Justice

Plataforma Constituyente de Pueblos Indígenas y Nativos
Indigenous and Native American Platform

Mesa Redonda binacional de Migración y Derechos Humanos
Binational Roundtable on Migration and Human Rights

Red de Redes de sobrevivientes de Violencia Armada
Binational Network against gun violence

CANADA

Black Lives Matter—YYC

GUATEMALA

Coordinadora Institucional de Promoción
por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI)

HONDURAS

Organización Fraternal Negra de Honduras

MÉXICO

ALDEA
Americas Program AMERICAS.ORG
Afropoderosas
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Casa Tochan
Casa Nyahbinghi México
Casa Tecmilco
Centro de Atención a la Familia
Migrante Indígena (CAFAMI)
Centro de Atención al Migrante Exodus
Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe
Centro de Estudios Ecuménicos A.C.
Centro Regional de Defensa de Derechos
Humanos José María Morelos y Pavón
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comunidad Afromexicana de Temixco, Morelos.
Cuerpo académico Procesos Transnacionales
y Migración BUAP CA 230
Desaparecidos justicia A.C. Querétaro
Hospitalidad y Solidaridad, A.C.
Huella Negra
Iniciativa Ciudadana región Puebla
Instituto RIA
LV Acompañamiento y Arte por los Derechos
de las Mujeres, A.C. (Las Vanders)
Mano Amiga de la Costa Chica
Méjico negro, AC
Movimiento de Pueblos originarios
en Resistencia (MOPOR CHIAPAS)
Mujeres Afrodescendientes CDMX
NuestraRed.mx
Padres y Madres de Ayotzinapa
Red de Juventudes Afrodescendientes
de América Latina y El Caribe
Red de mujeres afrodescendientes CDMX
Red de mujeres de los pueblos originarios y
afrodescendientes de Chiapas (REMIAC)
Red Nacional de Juventudes Afromexicanas
SERAPAZ
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

COLOMBIA

Grupo de investigación y Editorial Kavilando
/ Red InterUniversitaria por la Paz.

ESTADOS UNIDOS

Alianza Migrante (Migrant Alliance)
Black Lives Matter—South Bend
Change the Ref
Consejo de Pueblos Originarios
CODEPINK
Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas
Friends of Latin America
Global Exchange
Hacer las Paces
Latin America Working Group
Lila LGBTQ Inc.
Migrant and Minorities Alliance
March For Our Lives
Mexico Solidarity Project
National Lawyers' Guild- SF Bay Area chapter
Newtown Alliance
North American Indigenous Center of New York
Red de Pueblos Trasnacionales
San Francisco Living Wage Coalition
Red de Pueblos Transnacionales (RPT)
Tribunal Internacional de Conciencia de los
Pueblos en Movimiento
Witness at the Border
/Testigos en la Frontera

RECONOCIMIENTO ACKNOWLEDGMENT

Las organizaciones e individuos parte del proceso de la Cumbre por la Paz y del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia reconocemos que México y Estados Unidos están asentados sobre tierras indígenas y reconocemos el derecho histórico de estos pueblos y naciones. También, reconocemos la herencia del patriarcado, el racismo y la xenofobia que han dominado la región desde hace 531 años, subyugando a mujeres, poblaciones racializadas, personas en movilidad, personas con capacidades distintas y personas con identidades sexuales diversas y disidentes. Aspiramos a un mundo donde todos, todas y todas tengamos acceso a las mismas oportunidades, derechos y gocemos de los frutos de nuestros esfuerzos de forma equitativa, respetando a la naturaleza, a las personas, sus territorios, sus culturas y sus recursos naturales.

Es posible. Es urgente.

The organizations and individuals part of the Peace Summit process and the People's Movement for Peace and Justice recognize that Mexico and the United States stand on Indigenous lands. We recognize the historical rights of these peoples and nations.

We also recognize the legacy of patriarchy, racism and xenophobia that have dominated the region for 531 years, subjugating women, racialized populations, people on the move, people with different abilities and people with diverse and non-binary sexual identities.

We envision a world where we all have access to the same opportunities, rights and enjoy the fruits of our efforts equitably, respecting nature, people, their territories, their cultures and their natural resources.

It's possible. It is urgent.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

En la historia reciente, la relación México y Estados Unidos ha estado marcada por su intensidad económica, que beneficia de manera desigual a trabajadores y trasnacionales, impacta negativamente al medio ambiente y extrae recursos de pueblos indígenas en México; por una crisis migratoria sin precedente y por la creciente violencia armada que impacta con más fuerza a mujeres, jóvenes, migrantes, afrodescendientes, indígenas, defensores de derechos humanos, periodistas y población LGBTI+.

Dejando de lado los beneficios económicos que genera la relación binacional, la violencia y la discriminación que enfrenta la región han alimentado la crisis en la paz, la vida y los derechos humanos en las dos naciones, profundizando la frustración social y la tensión política entre las distintas posturas políticas, y agravando la violencia contra actores históricamente marginados negados de derechos.

La crisis de desaparecidos y el asesinato de periodistas y defensores del territorio en México, así como las matanzas en escuelas y la crisis de democracia electoral que terminó en la toma del Capitolio el 6 de Enero en los Estados Unidos, son sólo algunos de los indicadores de un escenario político que se aleja cada vez más de la paz, de la democracia y se acerca a la guerra y al autoritarismo.

Frente a este escenario y otros factores geopolíticos, la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos se ha centrado en fortalecer el comercio, la cooperación para la seguridad y más recientemente para enfrentar las epidemias de salud. Los acuerdos rectores de esta relación, tales como el Entendimiento Bicentenario, el Tratado de Libre Comercio y la Declaración de Líderes de América del Norte parten de estas áreas.

In recent history, the Mexico–United States relationship has predominantly prioritized economic interests, benefiting transnational corporations and the elite. Unfortunately, this approach has resulted in adverse consequences:

1. Environmental degradation, including unsustainable resource extraction and the displacement of Indigenous Peoples in both Mexico and the U.S.
2. An unprecedented migration crisis.
3. Escalating armed violence disproportionately impacting vulnerable groups such as women, youth, migrants, Afro-descendants, Indigenous Peoples, human rights defenders, journalists, and the LGBTI+ community.

These challenges have given rise to a crisis in peace, life, and human rights in the region. They have exacerbated social frustration, heightened political tensions, and increased violence against historically marginalized groups.

Indicators of this deteriorating situation include the crisis of missing persons and the targeted killings of journalists and land defenders in Mexico. In the United States, incidents such as school shootings and the crisis of electoral democracy, symbolized by the storming of the Capitol on January 6, point to a political landscape shifting even further away from peace and democracy towards conflict and authoritarianism.

Amidst this context and other geopolitical factors, cooperation between the Mexican and U.S. governments has mainly centered on trade, security, and more recently, addressing health crises. Key agreements governing this relationship, such as the Bicentennial Understanding, the Free Trade Agreement, and the Declaration of North American Leaders, have primarily focused on these areas.

Sin embargo, estos acuerdos se han quedado cortos en avanzar la agenda de paz, justicia y derechos humanos en la región. Se calcula que alrededor de 200 mil armas son traficadas de manera anual de Estados Unidos a México, que más de 118,000 mexicanos solicitaron asilo en Estados Unidos en 2022; 2.76 millones de personas de otros países intentaron cruzar la frontera de México con Estados Unidos; más de 111,000 personas están desaparecidas en México, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal rural Ayotzinapa; 648 tiroteos masivos en los Estados Unidos y un tercio de los estadounidenses cree que las elecciones fueron robadas por el actual presidente de los Estados Unidos. La mayoría de las víctimas de estos hechos son hombres y mujeres migrantes, indígenas, pobres, afrodescendientes, periodistas y defensores de derechos humanos.

Frente a esta realidad contundente de creciente violencia y violaciones a Derechos Humanos, en la Declaración de Líderes de América del Norte en 2023, los gobiernos de México y Estados Unidos se comprometieron a establecer grupos de trabajo para erradicar las causas del racismo y la violencia de género, e impulsar el reconocimiento e inclusión de las mujeres, grupos indígenas. No pudimos identificar ninguna información pública sobre el seguimiento a estos grupos.

Es claro para las comunidades históricamente marginadas de la agenda binacional oficial, que las prioridades de la agenda oficial binacional México-Estados Unidos no están atendiendo las crisis de derechos, de discriminación, devastación ambiental, ni están logrando detener la violencia armada que vive la región. Lejos de ello, los datos nos demuestran que los agravantes de estas violencias aumentan.

Es por ello, que desde el 2022, Un grupos de 70 organizaciones de México y Estados Unidos, encabezadas por Global Exchange, Black Lives Matter South Bend, El Centro Indígena de Norteamérica, March For Our Lives, Padres y Madres de Ayotzinapa, CIELO Leadership, La Red de Pueblos Transnacionales y Alto a las Armas de Estados Unidos a México, organizamos 10 foros presenciales y

However, these agreements have fallen short in advancing the agenda of peace, justice, and human rights in the region. Alarming statistics include the annual trafficking of approximately 200,000 weapons from the United States to Mexico, over 118,000 asylum requests by Mexicans in the United States in 2022, 2.76 million attempts to cross the Mexican-U.S. border from other countries, more than 111,000 missing persons in Mexico (including the infamous Ayotzinapa case), 648 mass shootings in the United States, and a third of Americans believing that the U.S. presidential election was stolen. Tragically, the majority of victims in these events are migrants, Indigenous Peoples, the impoverished, Afro-descendants, journalists, and human rights defenders.

Faced with this harsh reality of escalating violence and human rights violations, the Declaration of North American Leaders in 2023 committed the governments of Mexico and the United States to establish working groups aimed at eradicating the root causes of racism and gender-based violence, as well as promoting the recognition and inclusion of women and Indigenous groups. Regrettably, there is limited public information available regarding the monitoring and progress of these groups.

The existing priorities within the official binational Mexico-United States agenda have proven insufficient in resolving the ongoing crisis in the region, while aggravating factors continue to worsen.

This is why, beginning in 2022, a coalition of 70 organizations from Mexico and the United States, led by groups including Global Exchange, Black Lives Matter South Bend, The North American Indigenous Center, March For Our Lives, Padres y Madres de Ayotzinapa, CIELO Leadership, the Network of Transnational Peoples, and Stop Arms from the United States to Mexico, embarked on a series of ten in-person and virtual forums throughout the United States. The aim was to gather input, proposals, and demands for a new Mexico-U.S. relationship firmly rooted in principles of peace, justice, and human rights.

virtuales a los largo y ancho de los Estados Unidos para consultar la visión, las propuestas y las demandas para una nueva relación entre México y Estados Unidos que ponga la paz, justicia y los derechos humanos al centro de su actividad.

La respuesta a esta convocatoria fue rica y entusiasta. Recibimos más de 300 propuestas. Los resultados fueron claros: las sociedades compartimos el dolor y la injusticia de las políticas regionales, pero no compartimos los beneficios de la relación entre nuestras dos naciones.

Esta serie de foros concluyó en la celebración de la Cumbre por la Paz en febrero de 2023 en la Ciudad de México, con la participación entusiasta de más de 340 líderes y representantes de organizaciones de toda la región, con el objetivo de discutir los resultados de los foros e identificar prioridades y estrategias.

Como producto de esta Cumbre, nació el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la voz de las comunidades impactadas por la violencia y la injusticia en el concierto político regional, particularmente acelerado por las elecciones presidenciales a celebrarse en ambos países en 2024.

Con las aportaciones de los participantes en los eventos y con el impulso de líderes y comunidades de toda la región, **hoy presentamos la Agenda Binacional para la Paz y la Justicia** en la región. Contiene la voz de líderes indígenas, víctimas de violencia armada, familiares de desaparecidos, migrantes, mujeres, campesinos, obreros, personas racializadas y personas LGBTTQI+. Todas ellas, personas lastimadas por una relación binacional que históricamente les ha dividido y lastimado, pero que quieren catalizar esta frustración y esta rabia para convertirlas en propuestas estratégicas, amplias y profundas para relanzar la relación entre México y Estados Unidos.

The response to these forums was both enthusiastic and substantial, resulting in over 300 proposals. The overarching message was clear: while societies on both sides of the border share the pain and injustice, they do not equally share the benefits of the bilateral relationship.

This forum series culminated in the Peace Summit held in February 2023 in Mexico City, with more than 340 leaders and representatives from various organizations across the region. The summit aimed to discuss the forum results and identify priorities and strategies moving forward.

As a direct outcome of this summit, the People's Movement for Peace and Justice was born. Its objective is to amplify the voices of communities affected by violence and injustice in the regional political discourse, particularly in light of the upcoming presidential elections in both countries in 2024.

Building upon the contributions of forum participants and the encouragement of leaders and communities from across the region, **today we present the Binational Agenda for Peace and Justice.** It represents the voices of Indigenous leaders, victims of armed violence, families of the disappeared, migrants, women, farmers, workers, people with disabilities, and members of the LGBTQIA+ community. These are individuals deeply affected by a binational relationship that has historically divided and harmed them. However, they are determined to channel their frustration and anger into comprehensive and transformative proposals aimed at revitalizing the Mexico-U.S. relationship with peace, justice, and human rights at its core.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL DOCUMENTO? HOW IS THE DOCUMENT ORGANIZED?

Este documento está dividido en dos partes, además de una serie de documentos anexos.

La primera parte está conformada por 10 propuestas estratégicas para transformar la relación México-Estados Unidos a una que ponga a los derechos humanos y la participación ciudadana al mismo nivel que el comercio y la cooperación para la seguridad.

Estas 10 propuestas fueron redactadas por un equipo técnico-metodológico respondiendo a la pregunta *"Considerando las más de 300 propuestas recolectadas durante los foros por la paz, y las prioridades identificadas en la Cumbre por la Paz ¿Cuáles son las acciones que ayudan a que estas propuestas no sigan entrampadas, superen obstáculos y encuentren mejores condiciones para avanzar?"*

Así, estas 10 propuestas representan un horizonte de transformación.

La segunda parte está conformada por la lista de prioridades identificadas durante la Cumbre por la Paz, usando las propuestas de los foros por la paz. Estas prioridades representan propuestas y demandas concretas y claves para avanzar en el escenario actual de creciente violencia armada, criminalización, discriminación y devastación ambiental.

Y finalmente, como anexo a este documento, se incluyen las más de 300 propuestas recolectadas durante los Foros por la Paz.

This document is divided into two parts, in addition to a series of annexed documents.

The first part consists of ten strategic recommendations aimed at reshaping the Mexico-United States relationship, elevating human rights and citizen engagement to equal importance as trade and security collaboration.

These 10 proposals were written by a technical-methodological team responding to the question: "Considering the more than 300 proposals collected during the peace forums, and the priorities identified at the Peace Summit, what are the actions that will help these proposals not continue to be trapped, overcome obstacles and find better conditions to move forward?"

Thus, these 10 proposals represent a horizon of transformation.

The second part is made up of the list of priorities identified during the Peace Summit, where participants worked to consolidate and concretize the 300+ proposals from the local peace forums. These priorities represent key proposals and demands to advance in the current scenario of increasing armed violence, criminalization, discrimination and environmental disaster.

And finally, as an annex to this document are the more than 300 proposals collected during the Peace Forums.

Sirva entonces este documento para reconocer y discutir algunas propuestas innovadoras de cambio estructural, así como acciones concretas para la paz con justicia en la región México-Estados Unidos. Pero sobre todo, que sirva este material para fortalecer la construcción del gran frente ciudadano transfronterizo que necesitamos para impulsar la paz con justicia en el 2024.

This document then serves to recognize and discuss innovative proposals for structural change and concrete actions for building peace with justice in the region. But above all, the proposals aim to strengthen the cross-border people's movement needed to advance these shared goals in the 2024 elections.

NUESTRA VISIÓN DE FUTURO

OUR VISION OF FUTURE

Parar la presencia de armas en EEUU y su flujo descontrolado a México porque terminan cientos de vidas todos los días en los dos países.

Que el Ejército Mexicano y las agencias del Gob de EEUU dejen de hacer tareas que no les tocan y que generan más violencia en nuestras comunidades.

Dejar de ver las drogas como algo malo y que tiene que ser castigado.

Una política común entre EUA y Mx que sirva para que [en los casos de graves violaciones a derechos humanos] sepamos lo que pasó con nuestros seres queridos, haya justicia y podamos sanar a partir de las medidas de los gobiernos.

Que entre los gobiernos de EUA y México puedan colaborar para que podamos encontrar a nuestros seres queridos, sepamos qué pasó y haya justicia.

Un cambio para que todas las personas comprendan que todos somos iguales sin importar nuestro color de piel y para que sean capaces de fomentar la inclusión.

Que cada país tenga una política que proteja e incluya a las personas, familias y comunidades migrantes.

Que los países protejan a las personas que huyen con miedo de sus comunidades por el hambre y la violencia.

Que todas las personas cuidemos nuestro medio ambiente para cuidar la salud y el futuro de los niños.

Que las personas indígenas, sean vistas, respetadas y reconocidas en nuestros países.

Stop the proliferation of guns in the US and their illegal flow to Mexico that cost hundreds of lives every day.

Reform the Mexican military, DEA and other US agencies' control of security matters.

End punitive drug laws and adopt a public health approach to drug use.

Demand a binding binational agreement between the US and Mexico that places human rights at the same level of importance as trade or security considerations.

Establish a formal process within the governments of both the United States and Mexico to respond to the forced disappearance crisis.

Promote cultural and institutional transformations to end structures of racism.

Advocate for the development of regional citizenship in Latin America and the Caribbean.

Directly address the root causes of forced displacement. No one should be forced to flee their home out of fear and violence.

Protect the environment in order to ensure the health of present and future generations.

Recognize and respect the rights of Indigenous and Native Peoples' communities.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

PARA IMPULSAR LA PAZ Y

LA JUSTICIA EN LA REGIÓN

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

STRATEGIC PROPOSALS FOR

PEACE AND JUSTICE IN THE

MEXICO-US REGION

1

Mecanismo binacional para transparentar y controlar la venta de armas en EEUU, así como para controlar, y en su caso detener, su flujo y uso en México y Centroamérica, para parar la proliferación de armas en EEUU, México y Centroamérica que terminan cientos de vidas todos los días.

Binational Mechanism for effective control of gun sales in the US and to advance data sharing, transparency and control of US gun flows and their use in Mexico, to stop the proliferation of guns in the US and their illegal flow to Mexico that cost hundreds of lives every day.

2

Una Mesa de trabajo estratégica binacional de alto nivel para la Desmilitarización Responsable de las labores de seguridad civil, con participación de sociedad civil y organismos de DDHH de ambos países, para asegurar que el Ejército Mexicano y las agencias del Gob de EEUU dejen de hacer tareas que no le tocan y que generan más violencia en nuestras comunidades.

A Strategic binational High Level working group for Responsible Demilitarization of public safety, with participation of civil society and human rights multilateral organisms, to reform the Mexican military and US agencies' control of security matters.

3

Impulsar el diálogo regional en Política de Drogas y una Campaña Binacional para cambiar el paradigma punitivista sobre las drogas por uno que ponga la vida, los derechos y la salud al centro, para Dejar de ver las drogas como algo malo y que tiene que ser castigado.

Promote regional dialogue about drug policy and launch a Binational Campaign to end the punitive paradigm concerning drugs and promote a new one that puts humans, rights and health at its center.

4

Organismo binacional con participación de sociedad civil para el monitoreo de DDHH, con mecanismos extraordinarios de acceso a la Verdad, Búsqueda de Desaparecidos, Justicia y honrar a las víctimas, que logre Una política común entre EUA y MX que sirva para que [en los casos de graves violaciones a derechos humanos] sepamos lo que pasó con nuestros seres queridos, haya justicia y podamos sanar a partir de las medidas de los gobiernos.

Binding Binational institution for Human Rights monitoring that includes extraordinary mechanisms for determining truth, justice and to make victims whole, to establish a binding binational agreement between the US and Mexico that places human rights at the same level of importance as trade or security.

5

Estrategia/Campaña Binacional de búsqueda de personas desaparecidas, para Que los gobiernos de EUA y México puedan colaborar para que podamos encontrar a nuestros seres queridos, sepamos qué pasó y haya justicia.

Binational strategy for the search for the disappeared to establish a formal process within the governments of both the United States and Mexico to respond to the forced disappearance crisis.

6

Iniciativa Binacional de cambio cultural y educativo para desmontar la discriminación, el racismo y promover la educación para la paz, para que todas las personas comprendan que todos somos iguales sin importar nuestro color de piel y para que sean capaces de fomentar la inclusión.

Binational initiative of peace and cultural education aimed to dismantle structures of racism and promote community cohesion, as well as cultural and institutional transformations to end structures of racism.

7

Mesa de trabajo regional para la implementación de la Ciudadanía Latinoamericana y caribeña y por una reforma migratoria y laboral con enfoque de derechos en los Estados Unidos, para que cada país y la región tengan una política que proteja e incluya a las personas, familias y comunidades migrantes.

Regional Forum to implement Latin American and Caribbean citizenship and then to advocate for a rights-centered labor and immigration reform in the United States, so each country and the region have policies that protect and attend to persons, families, and communities engaged in migration.

8

Mesa de trabajo estratégica binacional de alto nivel con participación de Latinoamérica para atacar el hambre, la violencia y la devastación ambiental que están en la raíz de la migración y el desplazamiento forzado, para que los países protejan a las personas que huyen con miedo de sus comunidades por el hambre y la violencia.

Binational strategic working group with governments and civil society to address the hunger, violence and environmental damage that are at the roots of forced displacement and migration, to directly combat the phenomenon of forced displacement. No one should be forced to flee their home out of fear and violence.

9

Crear Fondo Binacional para compensar pérdidas y daños ambientales, tal como fueron mandatados por la COP27 e implementar la Cláusula de Paz para imponer moratorias en los acuerdos comerciales cuando tengan impactos negativos en el medio ambiente de trabajadores y trabajadoras, para que todas las personas cuidemos nuestro medio ambiente para cuidar la salud y el futuro de los niños.

Create a Binational Fund to compensate for environmental losses and damages as mandated by the COP27 and implement the Peace Clause to put moratoriums on trade agreements that negatively impact the environment. We must protect the environment in order to ensure the health of present and future generations.

10

Acuerdo legislativo binacional para reconocer las autonomías de los territorios indígenas, prohibir el extractivismo en sus tierras y permitir la movilidad regional.

Legislations in Mexico and the US that recognize and respect the rights of Indigenous and Native Peoples', prohibit extractivism in their land and allow regional mobility.



**PROPUESTAS, DEMANDAS
E IDEAS FUERZA POR GRUPO
DE IDENTIDAD/TEMÁTICO
SURGIDAS DE LA CUMBRE
POR LA PAZ**

**PROPOSALS, PRIORITIES
AND IDEAS FROM THE PEACE
SUMMIT BY IDENTITY GROUP**

SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA ARMADA, FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS/ SURVIVORS OF GUN VIOLENCE, RELATIVES OF THE DISAPPEARED AND HUMAN RIGHTS DEFENDERS.



- Control de la exportación/importación de armas que afectan tanto a EUA como México, enfocándose tanto en limitaciones a empresas, como a las autoridades, y su uso (destinatario final). Concretamente, aprobar el ARMAS Act.
- Prohibición de armas de asalto en Estados Unidos.
- Eliminar la Ley de inmunidad de los fabricantes de armas (PLCAA).
- Es urgente que el gobierno mexicano retome los postulados que planteó en el Plan Nacional de Desarrollo sobre política de drogas y justicia transicional, mediante la conclusión del proceso regulatorio que quedó incompleto en el poder legislativo, la aplicación efectiva de la ley de amnistía en los casos de delitos relacionados con drogas, la finalización de la estigmatizante y desinformante campaña de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, la desmilitarización de las estrategias sobre drogas y la implementación de políticas de reducción de riesgos y daños.
- Regulate imports and exports impacting realities in Mexico and US, focus on companies, authorities and final users. Specifically, pass the ARMAS Act.
- Assault weapons ban in United States.
- Eliminate impunity legislation protecting weapons manufacturers (PLCAA).
- The Mexican government must keep its promise regarding the National Plan for Development of Drug Policy and Transnational Justice, which was abandoned in the legislature.
- Update binational laws for cooperation that favor new prohibitionist and non-militarization paradigms. The Foreign Assistance Act of the USA, specifically sections related to "certification of drugs", which allows USA to force Mexico to implement militarization and punitive measures. This does not respect Mexican national sovereignty, and favors hegemony.

- Modificar las políticas de cooperación binacional que incentivan paradigmas prohibicionistas y detonan violencia. En particular, la Ley de Asistencia Extranjera (Foreign Assistance Act) de Estados Unidos, específicamente las secciones vinculadas a la "certificación de drogas" ("drug certification"), que permiten a Estados Unidos obligar a México a implementar políticas de seguridad militarizadas e instaurar un sistema penal con características de un régimen penal del enemigo. Este tipo de leyes constituyen amenazas a la soberanía de las naciones, implican la instalación de hegemonías neocoloniales e impiden relaciones binacionales saludables.
- Transparencia de datos e información que tienen que ver con armas y los impactos de la violencia (cómo y quiénes, por ejemplo, infancias, periodistas, afrodescendientes, personas desaparecidas, personas desplazadas).
- Víctimas, cómo ponerlas en el centro de estos procesos, la justicia, la verdad, la reparación (periodistas, desaparecidos, defensores), cambiar las percepciones sobre las afectaciones y sus efectos en nuestras comunidades.
- Proteger a quienes informan.
- Contribuir en la apertura de las zonas silenciadas para la libertad de expresión, fortalecer a los medios de comunicación.
- Educación y acciones de paz: narrativas y articulación.
- Considerar de forma particular a NNA, políticas amplias de atención a las infancias por las consecuencias de la violencia.
- Justicia, justicia transicional: procesos organizativos que coloquen las exigencias de justicia (y acompañamiento a procesos/víctimas concretas), así como búsqueda de verdad sobre la violencia en ambos países.
- Access to information/data related to impacts of armed violence, detailed by group, including, children, journalists, Afro-descendent/Black community, forcibly displaced groups, etc.
- Center victims in all processes for justice, truth, reparations; change social perceptions and show real impacts.
- Protect those who report the truth.
- Identify zones of media silence and facilitate freedom of expression and media coverage there.
- Education and actions for peace: narratives and networking.
- Focus on specific needs of children and adolescents, strong policy attentive to impacts of violence.
- Justice, transitional justice: accompaniment of legal processes and cases, truth-finding related to violence in both countries.

PERSONAS EN MOVILIDAD/ PEOPLE ON THE MOVE



- Reconocimiento de identidades diversas.
- Identidad, nacionalidad, certeza jurídica y acreditación con documentos de identidad. Facilitar el acceso a documentos de identidad y que se reconozcan documentos expedido por las autoridades mexicanas.
- Vivienda.
- Educación, en espacios formales, por ejemplo, crear espacios como universidades multiculturales, tecnologías para docentes y parámetros etnoeducativos , desde la educación popular.
- Libre tránsito, sin violencias y eliminar perfilamiento racial.
- Reconocimiento y respeto a las comunidades originarias.
- Desmontar el racismo estructural.
- Crear y ejecutar leyes en contra de la apropiación cultural de los pueblos originarios.
- Eliminar perfilamiento racial y tipificar la discriminación racial como delito en cumplimiento de los marcos internacionales.
- Reconocer la seguridad comunitaria autogestiva, transversalizar la perspectiva étnica.
- Desmontar el concepto de raza.
- El Estado debe garantizar la preservación de las lenguas originarias y generar acceso a la interpretación y traducción e inclusión de lenguas diversas en todos sus servicios.

- Recognize diversity of identities
- Identity, nationality, access to formal registration and documentation, re-recognition of all identity documentation emitted by Mexican authorities.
- Housing.
- Formal education, establish multicultural universities, technology for teachers and education programs, also popular education.
- Free transit, free of violence, stop racial profiling.
- Establish recognition and respect for Indigenous peoples.
- Dismantle structural racism.
- Create laws against cultural appropriation of cultural elements of indigenous/native peoples.
- End racial profiling and establish racial discrimination to be a crime, following international legal frameworks.
- Protect communities' capacities for self-determination and development, strengthen trans-ethnic perspective.
- Dismantle the concept of race.
- The state must guarantee the sustainability of indigenous/native languages and provide interpretation and translation, and guarantee the inclusion of Indigenous/Native languages.

- Denunciar la violencia lingüística y que sea reconocido el derecho humano fundamental a la interpretación para poblaciones indígenas.
- Debe haber políticas públicas de justicia y desarrollo de personas y pueblos afrodescendientes ya que está concluyendo el decenio promovido por la ONU.
- Cesar la deportación de personas que están bajo protección internacional y niñez, respetando el interés superior de la niñez y aplicar la ley general de derechos para niños, niñas y adolescentes (LGDNNA).
- Eliminar la criminalización, militarización y procedimientos migratorios desde los perfilamientos raciales, xenofobia y discriminación. Una acción específica es reformar la Ley de Migración eliminando los artículos 97 y 98.
- Alto a las violencias y políticas que fomentan el riesgo de las personas en movilidad, incluyendo las violencias de género y sexual.
- Fortalecer atención consular mexicana y acciones para el acceso a servicios.
- Reconocer que las violencias no son sólo generadas por el crimen organizado, sino existe una responsabilidad de los Estados y por lo tanto, se requieren acciones específicas.
- Reforma a la Ley de Migración en sus artículos 17, 90, 92, 97, 98 y 111.
- Derogación del artículo 33 constitucional.
- Implementación del Artículo 89 la LGDNNA.
- Implementación de la Ley General de Educación en particular la reforma generada en 2017 sobre facilitar el acceso, permanencia, revalidación y certificación de la educación de las personas en movilidad.
- Promulgación de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno.

- Denounce linguistic violence (exclusion, erasure, etc.), recognize the fundamental right to have interpretation for Indigenous communities.
- There needs to be public policies to support justice and development of Afro-descendent/ Black communities, in accordance with the UN's recent initiative.
- End deportations for people that qualify for international protection and for children, implement and pass the general law on rights of children and adolescents (LGDNNA).
- Stop criminalization, militarization, xenophobia and racial profiling impacting migration. Reform of migration law, eliminate articles 97 and 98.
- Stop violence and policies that generate vulnerabilities for migrants, including gender and sexual violence.
- Strengthen Mexican consular services, and expand access to services.
- Recognize that violence is not only generated by organized crime; there is state responsibility, specific actions are required in this regard.
- Reform Migration Law, articles 17, 90, 92, 97, and 98.
- Elimination of article 33 for being unconstitutional.
- Implement LGDNNA.
- Implement General Law for Education, particularly the 2017 reform on expanding access, permanence, validation and certification of education for migrants.
- Passage of Law for prevention and attention to forced internal displacement.
- Reform article 546 of the Federal Code.

- Reforma de los Artículos 314 y 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para facilitar el acceso de la nacionalidad mexicana de personas nacidas en el exterior con madre o padre mexicanos, actualmente se encuentra en cámara de diputados.
 - Reformar el art. 23 del reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
 - Apoyar la iniciativa de reforma del art 115 constitucional, como una iniciativa ciudadana que ya fue elaborada por Reynaldo Castro Melgarejo.
 - Promover políticas desde el derecho a la información asequible, que considere a los pueblos históricamente excluidos.
 - Combate a la corrupción en los procesos de movilidad.
- on Civil Procedures to increase access to naturalization in Mexico by persons born abroad that have a Mexican parent. This is currently in the house of delegates.
- Reform of protocols in article 23 for the Law on Refugees, asylum and political protection.
 - Support initiative for reform of article 115 of the constitution, following on the initiative of Reynaldo Castro Melgarejo.
 - Promote policy for rights and access to information, taking into consideration historically excluded groups.
 - Combat corruption in processes impacting migration.

PUEBLOS INDÍGENAS. NATIVOS AMERICANOS/ INDIGENOUS PEOPLES NATIVE AMERICANS.



- Protección de plantas y animales.
- Sólo se puede tocar las tierras con el permiso de los pueblos Indígenas.
- Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) para cualquier proyecto.
- Desinvertir de proyectos extractivistas internacionales.
- Reconocer los derechos de las personas Indígenas y Afro-descendientes.
- Respetar los acuerdos que uno firma.
- Establecer coaliciones independientes para vigilar y entender lo que pasa en otras comunidades.
- Presionar a los gobiernos de Estados Unidos y México a respetar las leyes.
- Acabar con la corrupción.
- Para que el gobierno mexicano cumpla su obligación a defender los derechos humanos: reconocer el labor de los defensores de tierras, el agua, y derechos; escuchar a los pueblos; reconocer el derecho de la autonomía y auto-determinación para pueblos Indígenas y Afro-descendientes; avanzar reforma constitucional para estos grupos inmediatamente; realizar consultar según protocolos oficiales, p.ej. Convenio 169 (OIT); enfrentar las causas estructurales del desplazamiento interno.
- Protection of plants & animals.
- Land can only be touched if approved by Indigenous people.
- Free,prior, & informed consent (FPIC) on all extractive projects.
- Divestment from international extraction projects.
- Recognize the rights of Indigenous & Afro descendants.
- Respect the agreements you sign.
- Establish independent coalitions for surveillance of what's happening in communities.
- Pressure the US and Mexican governments to respect the law.
- Stop corruption.
- To the Mexican government to comply with its obligation to defend human rights; recognize the labor of people who defend land, water, and rights; listen to the needs of the peoples; recognize free determination and autonomy of indigenous and afro mexican peoples; present to the congress the constitutional reform of the indigenous and afro mexican peoples as soon as possible; realize consultations in alignment with international standards such as Convention 169 of the International Labor Organization (ILO); attend the structural causes of internal displacement.

GRUPOS RACIALIZADOS, AFRODESCENDIENTES Y NEGROS/ RACIALIZED, AFRO DESCENDANT AND BLACK COMMUNITIES.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Hacer un llamado a la solidaridad entre grupos y personas Negras/Afrodescendientes.• Incrementar el poder colectivo a través del mundo.• Hacer un llamado a la solidaridad y a la acción; algo que vaya más allá de las palabras.• Desarrollar una protesta y rueda de prensa de alcance global.• Movilizaciones nacionales para visibilizar los problemas que impactan a los Afro-mexicanos y las Afro-mexicanas.• Expandir la participación de otros países (además de México, Canadá, USA).• Curriculum pedagógico de historia para Afrodescendientes y comunidades Negras.• Establecer una Afro-Universidad – cumplir con la promesa, reconocimiento.• Aumentar presencia de personas Afrodescendientes en los libros de colegio (ver iniciativas actuales).• Dar enfoque a la historia, incluyendo a los grupos caribeños.• Dar enfoque a la identidad y la economía.• Constitución de México, Sección C Art. 2 - incluir Afro-Mexicanas/Afro-mexicanos. | <ul style="list-style-type: none">• Calling for solidarity among Black people across communities.• Building collective power among Black people worldwide.• Calling for Solidarity among Afro-Descendants and action: not talk.• Advocating for protest and a press conference that is heard worldwide.• Have demonstrations in Mexico City supporting Black people.• Organize a demonstration in Mexico City in support of Black/Afrodescendant people.• National Mobilization to emphasize the problems that Afro-Mexican, descendants.• More participation from more countries (not just Mexico, Canada, US).• Afro-Descendants' history in the curriculum.• Create an Afro-University – fulfill that promise; recognition.• Include Afro-Descendent people in the textbooks (see current initiatives).• Focus on history and including Caribbean people in conversations.• Focus on identity and the economy. |
|--|---|

- Reparaciones, auto-identificación, más representación en el gobierno.
- Crear base de datos sobre armas entrando a México.
- Visibilizar las muertes de personas Negras/ Afrodescendiente por fuera de los Estados Unidos.
- Demandas que enfrentan la violencia institucional, y que mantengan el tema de la paz al centro; Apoyar candidatos específicos .
- Llamado al gobierno de Oaxaca a respetar la comunidad Afro mexicana.
- Movilizar a las personas y comunidades: restaurar los derechos al territorio, y limitar los proyectos extractivistas.
- Llamar atención a las formas que el turismo contribuye al desplazamiento y desalojo.
- Derecho a la auto-identificación.
- Visibilizar y concientizar sobre la migración internacional.
- Migración – involucrar a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
- Llamar atención a los requisitos de Visa necesarios para entrar a Estados Unidos y México
- Catálogo de políticas públicas.
- Data para violencia de género, desagregada para poder identificar a mujeres Afrodescendientes/
- Poner el racismo estructural al centro, no como un addendum o algo secundario.
- Section C Article 2 of the Mexican constitution – Include Afro-Mexicans.
- Reparations, self-ascription, more representation in government.
- Create a gun database about weapons coming into Mexico.
- Awareness for Black people killed outside of the US; attacking extractivist economic operations -- Oaxaca
- Demands fixing institutional violence and keeping peace as the center of the conversation; proposing particular candidates.
- Call for the govt of Oaxaca to respect the Afro-Mexican community.
- Mobilize Black people; Restore land rights and limit extractivist projects.
- Focus on how tourism displaces people from their lands.
- Right to self-Ascription.
- Raising awareness of migration to other countries.
- Migration – something that involves the ministry of human rights.
- Address visa requirements for people from South America to come to Mexico.
- Catalogue of public politics what/
- Gender-based violence Data needed and broken down for Afro-Mexican women/
- Structural Racism at the center – but not an add-on.

OBREROS Y DEFENSORES DE DERECHOS SINDICALES/ WORKERS AND LABOR RIGHTS ADVOCATES.



- Una federación para Justicia laboral; eliminar las entidades oficiales e incorporarlas a un cuerpo judicial. Capacitación integral para jueces dirigida por Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Además, establecer jurisdicciones universales para el sector industrial. De esta manera no se concentra el poder en las manos de la secretaría de labor, una posición que cambia de
- Presentemente, no todas las empresas están bajo jurisdicción federal, En el caso de VU, este caso se administró a través de cortes estatales, que en muchos casos, están aliadas con sindicatos y partidos conservadores.
- Si es posible que el dinero y el capital cruce fronteras, lo mismo deberías ser para los trabajadores. Todo programa de trabajadores "temporarios," Bracero Redux, tiene que terminar. Los trabajadores en el programa H2-A son sirvientes atados, tienen que soportar malas condiciones o se les deporta.
- Los trabajadores migrantes deben tener los mismos beneficios que tienen los ciudadanos de Estados Unidos. Hacen el mismo trabajo, tienen los mismos empleadores, pero experimentan maltrato
- A process of federalization of labor justice, eliminating the state level labor authorities, or rather, incorporating them into the federal judiciary. There would also need to be a robust training program for judges, run by the Mexican Secretariat on Work and Social Services (STPS). In addition, there should be universal federal jurisdiction of all industrial sectors. I think this is the approach we should take, rather than returning authority to the STPS, where so much depends on the Secretary of Labor, who happens to be fairly progressive now, but is also very much subject to political pressures, and might be succeeded by someone less progressive.
- Currently, only some companies fall under federal jurisdiction. At VU, because it was not deemed to be part of the auto sector covered by the federal courts, it was referred to the state Tribunal, which in some states are still affiliated with conservative parties and unions. There should be universal federal jurisdiction of all industrial sectors.
- If capital and money can cross borders freely, so should workers. To that end, all "temporary" worker programs, Bracero redux, must be ended. Workers in the H2-A program especially are like indentured servants, tied to one company, and forced to put up with bad conditions or be deported.
- Immigrant workers should enjoy the same rights and benefits as US citizens. They often do the same work, and/or work for the same employers, and yet suffer disparate treatment.

**ANEXO
ANNEX**

**LISTA COMPLETA DE
PROPUESTAS RECOGIDAS
DURANTE LOS FOROS
POR LA PAZ
FULL LIST OF PROPOSALS
FROM THE PREPARATORY
PEACE FORUMS.**

POR UNA REGIÓN DE JUSTICIA Y SIN VIOLENCIA ARMADA

- 1.2.1. Impulsar y fortalecer el enfoque de derechos humanos y de salud en la seguridad pública**
- 1.2.1.a.** Combatir la violencia regional con un enfoque de derechos humanos
- 1.2.1.b.** Formación de integrantes y mandos de la Guardia Nacional en materia de Derechos Humanos – La visibilidad de lo que acontece en medios de comunicación
- 1.2.1.c.** Bajo el reconocimiento que la militarización no es sólo el resultado del flujo de armas, sino una política de estado que busca establecer el control de territorios para el desarrollo de actividades económicas, que incluyen a las actividades criminales, es importante reconocer los procesos organizativos de las comunidades que logran fortalecer los vínculos comunitarios y medidas de seguridad recuperando formas ancestrales encargadas de mantener la seguridad dentro de sus comunidades.
- 1.2.1.d.** Reconocimiento social del conflicto a nivel binacional, manifestando que hay sectores que han sido criminalizados y marginalizados.
- 1.2.1.e.** Implementar políticas de salud pública basadas en la reducción de daños y la acción comunitaria en el tema del uso de plantas y sustancias psicoactivas.
- 1.2.1.f.** Realizar análisis de contexto sobre la vida de los defensores de derechos humanos, periodistas, etc. para generar información descentralizada tomando en cuenta, datos de identidad, posicionando la articulación entre sociedad civil Mexicana y EEUU y demás países de la presente cumbre.
- 1.2.1.g.** Cambio de narrativa, reconocimiento de las víctimas como personas, no como cifras.
- 1.2.1.h.** Que funcionarios públicos “metan el cuerpo” mucho más junto a las víctimas en acciones directas por verdad y justicia.
- 1.2.2. Control de Armas**
- 1.2.2.a.** Es importante que el Congreso apruebe controles para identificar usuarios finales.
- 1.2.2.b.** Prohibición de venta de armas de asalto. Prohibición de venta de armas a personas y corporativos con antecedentes criminales. El estado debe rendir cuentas de su actuar violento y criminalizando que solo ha marginalizado a nuestros pueblos.
- 1.2.2.c.** No es posible controlar la distribución de las armas, pero sí, reglamentar la producción y venta.
- 1.2.2.d.** Control sobre las empresas que venden armas
- 1.2.2.e.** Reglamentación del mercado de armas en Estados Unidos.
- 1.2.2.f.** Control del flujo de armas: Una forma de reducir la violencia relacionada con el tráfico de drogas es controlar el flujo de armas ilegales. Esto puede incluir medidas para mejorar la regulación de la venta y distribución de armas, así como para aumentar la eficacia de las políticas de interdicción y confiscación de armas ilegales. Sobre todo, las medidas desde el enfoque de la salud pública y la epidemiología tienen grandes resultados.
- 1.2.2.g.** Control de lo ilegal y de lo criminal
- 1.2.2.h.** Atención prioritaria al flujo de armas.
- 1.2.2.i.** Control del flujo de armas: Es necesario implementar medidas para controlar el flujo de armas ilegales, como mejorar la regulación de la venta y distribución de armas, aumentar la eficacia de las políticas de interdicción y confiscación de armas ilegales, y colaborar en la identificación y seguimiento de las armas ilegales transnacionales.
- 1.2.2.j.** Mejorar la regulación de armas: Es necesario fortalecer la regulación sobre la venta y distribución de armas, mediante medidas como la implementación de registros de armas, la realización de investigaciones antes de la compra, prohibiciones a ciertos tipos de armas y municiones y sistemas de alerta temprana para detectar armas ilegales.

- 1.2.2.k.** Investiga y sanciona a los vendedores de armas ilegales: Es importante investigar y sancionar a los vendedores de armas ilegales, tanto en México como en Estados Unidos, mediante medidas como la aplicación de leyes y reglamentos existentes, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y el apoyo a las organizaciones dedicadas a combatir la venta de armas ilegales.
- 1.2.2.l.** Implementación de acciones efectivas para el control de los flujos de armas por parte de ambos países. (EEUU y México)
- 1.2.2.m.** Establecimiento de controles efectivos y de rendición de cuentas.
- 1.2.2.n.** Restauración de procesos de debida diligencia sobre tráfico de armas; desmilitarización y control y verificación de armas.
- 1.2.2.o.** Incorporación de actores de la sociedad civil en los procesos de control y verificación de armas.
- 1.2.2.p.** Implementación de controles post-entrega (monitoreo de armas, partes de armas y municiones después de la entrega del arma).
- 1.2.2.q.** Implementación de mecanismos de control para los productores de armas.
- 1.2.3.** Desmilitarizar, ciudadanizar la Seguridad
- 1.2.3.a.** Es importante quitar el poder que se le ha dado al ejército. Ampliando las actividades militares hacia lo civil.
- 1.2.3.b.** Salida paulatina del ejército de seguridad. Que sólo sería justificada en ciertas zonas, donde existan indicadores de descenso de criminalidad.
- 1.2.3.c.** Desmilitarización/Desarme
- 1.2.3.d.** estamos a favor de que la Guardia Nacional esté en manos de los militares hasta 2028. Terminar con la guerra contra el narco
- 1.2.3.e.** Reconstrucción, en México y a nivel federal, de una fuerza de policía civil competente que pueda volver a ocupar los espacios de contraste al crimen organizado.
- 1.2.3.f.** Desmilitarización de la lucha contra el tráfico de drogas: La militarización de la lucha contra el tráfico de drogas en México ha sido criticada por sus efectos negativos en la seguridad y los derechos humanos. Se ha propuesto un enfoque de reducción de daños y no militar para abordar el problema del tráfico de drogas, que incluye medidas para fortalecer las instituciones civiles y mejorar la gobernanza y la justicia.
- 1.2.3.h.** Reducir el protagonismo, liderazgo y financiamiento que tienen las instituciones de seguridad en materia de política de drogas y reorientar recursos hacia instituciones encargadas de educación, salud, cultura y bienestar.
- 1.2.3.i.** Dejar de medir los impactos de las políticas en materia de drogas mediante estadísticas sobre incautaciones, detenciones y cifras que responden al modelo de "guerra contra las drogas". Es necesario sustituirlos por indicadores sobre la garantía del goce de los derechos humanos por parte de la población de ambas naciones.
- 1.2.3.j.** Desmilitarizar la narrativa oficial sobre drogas, el espacio público, los esfuerzos en materia de salud y las estrategias de seguridad pública.
- 1.2.3.k.** Implementar políticas de descriminalización efectiva del consumo de plantas y sustancias psicoactivas ilegalizadas y avanzar hacia su regulación integral con perspectiva de derechos humanos y justicia social.
- 1.2.3.l.** No militarizar la protección de DDHH.
- 1.2.3.m.** Distensión Nacional.
- 1.2.3.n.** Desmilitarización.
- 1.2.3.o.** Legitimizar y legalizar policías comunitarias con control y arraigo comunitarias.
- 1.2.3.p.** Establecimiento de mando civil en la Guardia Nacional.
- 1.2.3.q.** Respeto a las leyes de los pueblos, su autogobierno y sus decisiones.
- 1.2.3.r.** No más represión violenta en las protestas.
- 1.2.3.s.** Permitir, no obstaculizar y atender el ejercicio de la protesta.
- 1.2.3.t.** Desactivación de mecanismos de vigilancia y espionaje.

- 1.2.3.u.** Alto al hostigamiento y criminalización de la sociedad civil organizada y periodistas.
- 1.2.4.** **Transparencia**
- 1.2.4.a.** Crear mecanismos de transparencia, pues el ejército mexicano no rinde cuentas a ninguna institución
- 1.2.4.b.** La ciudadanía tiene que estar informada sobre la dinámica de las armas en este país
- 1.2.4.c.** Transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades y empresas estadounidenses en la venta y control de armas producidas o distribuidas en ese país
- 1.2.4.d.** Transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades mexicanas en el control y seguimiento de las armas que entran legal e ilegalmente al país-
- 1.2.4.e.** Fortalecimiento de las instituciones: Fortalecer las instituciones en México y Estados Unidos es esencial para abordar los problemas relacionados con el tráfico de drogas y la violencia armada. Esto incluye medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, así como para luchar contra la corrupción.
- 1.2.4.f.** Reformular acuerdos y compromisos relacionados con sus obligaciones con la población
- 1.2.4.g.** Deslinde y transparencia, combate a corrupción e impunidad y rechazo a acuerdos con grupos de poder e intereses que no sean los del bien común.
- 1.2.4.h.** Medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, así como para luchar contra la corrupción.
- 1.2.4.i.** Ejercicio de transparencia activa por parte de las instituciones y la industria de armas, partes de armas y municiones.
- 1.2.4.j.** Implementación de controles efectivos de armas que transparenten usuarios finales.
- 1.2.4.k.** Exigencia de rendición de cuentas a la SEDENA por parte del poder legislativo.
- 1.2.5** **Litigio Internacional**
- 1.2.5.a.** Dar seguimiento a la demanda hecha por México a Estados Unidos por el tráfico de armas.
- 1.2.6.** **Memoria, justicia Efectiva y fin de la corrupción**
- 1.2.6.a.** Justicia para los 43
- 1.2.6.b.** La existencia de una fiscalía que en realidad desarticule las organizaciones criminales elaborando procesos exemplares.
- 1.2.6.c.** Presentación con vida de personas desaparecidas
- 1.2.6.d.** Extradición de Tomás Zerón Lucio
- 1.2.6.e.** Atender la corrupción y detener la impunidad}
- 1.2.6.f.** Promover juicio político en contra de los servidores que han legalizado la comercialización de las drogas.
- 1.2.6.g.** Reconversión de los cultivos con reparación del daño correspondiente: apoyo concreto y proporcional para los campesinos interesados.
- 1.2.6.h.** Creación de una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, capaz de luchar de manera efectiva en contra del crimen organizado. Ideal sería la inclusión de la Fiscalía en el poder judicial.
- 1.2.6.i.** La creación de una estrategia federal contra la actuación criminal de instituciones del Estado mexicano como gobiernos municipales, gobiernos estatales, fiscalías locales y regionales. Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo.
- 1.2.6.j.** La protección efectiva de las comunidades bajo asedio a través de una política pública integral por medio de acciones de coordinación interinstitucionales que generen condiciones para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las comunidades deben contar con análisis de riesgo apropiados, con planes de protección acordados con ellas y que sean implementados en su totalidad.

- 1.2.6.k.** El Estado mexicano debe adoptar medidas suficientes para garantizar a las comunidades indígenas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos condiciones para el acceso a la justicia. Para ellos serán necesarias medidas como:
- o En los casos de homicidios, desaparición forzada y en cualquier caso que esté en riesgo la seguridad de las comunidades, es necesario que las fiscalías den seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes emitidas por las organizaciones de sociedad civil para evitar la impunidad que perpetúa la situación de violencia.
 - o La debida integración de carpetas de investigación que agoten todas las líneas de investigación en cada uno de los casos denunciados. Estos procesos deben ser informados a las víctimas y a sus familias a través de los medios culturalmente apropiados que sean necesarios.
 - o Respetando el debido proceso de los imputados, es necesario que sean señaladas y sentenciadas las personas responsables de las violaciones de derechos humanos y los delitos denunciados.
 - o El poder judicial deberá aplicar los controles de convencionalidad necesarios para garantizar la aplicación del estado de derecho en todos los ámbitos de su competencia. Se deben garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en los instrumentos internacionales aplicables en México, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía.
- 1.2.6.l.** Creación de comisiones de la verdad binacionales que aborden los impactos de la implementación de la guerra contra las drogas. Dichas comisiones deberán contar con autonomía, financiamiento y personal capacitado.
- 1.2.6.m.** Incorporar políticas de amnistía, medidas de excarcelación, indultos y reinserción social con perspectiva de derechos humanos dirigidas a personas acusadas, sentenciadas y privadas de la libertad por delitos contra la salud relacionados con plantas y sustancias psicoactivas ilegalizadas.
- 1.2.6.n.** Creación o facilitación de espacios de memoria dignos en torno a graves violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado.
- 1.2.6.o.** Reparación integral en los crímenes de Estado.
- 1.2.6.p.** Disminución de la burocracia en los protocolos de los Mecanismos de Protección de Personas Defensoras de DDHH y Periodistas.
- 1.2.6.q.** Acceso a la justicia, verdad y garantías de no repetición por la sociedad civil, personas defensoras, periodistas, buscadores, etc.
- 1.2.6.r.** Ampliar y fortalecer el alcance del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con enfoque en la defensa de DDHH, territorio y periodistas comunitarixs
- 1.2.6.s.** Erradicación de la impunidad ante los crímenes de Estado.
- 1.2.6.t.** Que se vigilén o se investiguen las redes de crimen y corrupción que existen en el país.
- 1.2.6.u.** Que exista una defensa integral efectiva para el acceso a la justicia de las personas defensoras.
- 1.2.6.v.** Respetar y acatar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas.
- 1.2.7.** **Cooperación y acción interinstitucional y binacional para la prevención de la violencia**
- 1.2.7.a.** Cooperación Internacional: Es importante para reducir el impacto del flujo de armas, es necesaria la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para controlar la venta y el tráfico de armas ilegales entre los dos países, mediante la intercambio de información, el trabajo en conjunto en operaciones de interdicción y la implementación de acuerdos internacionales.

- 1.2.7.b.** En general, reducir los impactos negativos del flujo de armas y la militarización requiere un enfoque integral y colaborativo que involucre a diferentes actores y sectores. Es importante abordar tanto las causas subyacentes como los efectos de la violencia relacionada con el tráfico de drogas, y considerar tanto las políticas y programas a implementar como la forma de llevarlos a cabo.
- 1.2.7.c.** Diálogo y cooperación internacional: Es importante establecer un diálogo y cooperación internacional entre los gobiernos de México, Estados Unidos y los países de Centroamérica para abordar los problemas relacionados con el tráfico de drogas y la violencia armada.
- 1.2.7.d.** Colaboración binacional para el control de armas en los lugares fronterizos.
- 1.2.7.e.** Respetar la soberanía de cada nación y acordar la no obstaculización de procesos políticos que tiendan a transitar hacia políticas de drogas con perspectiva de reducción de daños, derechos humanos y justicia social.
- 1.2.7.f.** Establecer acuerdos de cooperación binacional en materia de política de drogas que abandonen el enfoque bélico de combate a los grupos dedicados al narcotráfico y que reconozcan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, prioricen políticas de salud y educación y pongan al centro el respeto a los derechos humanos.
- 1.2.7.g.** Fortalecer la participación de instituciones públicas de educación, salud, cultura y bienestar en el diseño y la implementación de políticas en materia de drogas
- 1.2.7.h.** Implementación de registros de víctimas de desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos con datos de identidad para facilitar la identificación de las víctimas y el análisis de patrones de actuación de acuerdo a categorías de vulnerabilidad.
- 1.2.7.i.** Creación de un fondo emergente de apoyo económico para DDHH.
- 1.2.7.j.** Fortalecimiento de la coordinación inter/intra institucional.
- 1.2.7.k.** Atención competente de autoridades con apertura de espacio, rutas y acompañamiento directo en acciones a familiares en búsqueda, en caso de justicia, protocolos y mecanismos particulares, recursos presupuestales.
- 1.2.7.l.** Contar con medidas de protección efectivas: un fondo emergente de apoyo económico, disminuir la burocracia y la victimización de las personas.
- 1.2.8.** Legislación y regulación
- 1.2.8.a.** Regulación de cannabis. Eliminación de la política punitiva del sistema que ha continuado con la situación de represión. Se pretende brindar oportunidades a nuestras comunidades a través de estas iniciativas. A personas usuarias, productoras, etc.
- 1.2.8.b.** Defensa al derecho desarrollo de la personalidad
- 1.2.8.c.** Dejar de criminalizar a los más vulnerables.
- 1.2.8.d.** Despenalización del uso de las plantas y sustancias
- 1.2.8.e.** Educacion y legislacion en las leyes de EU
- 1.2.8.f.** Mejorar marcos normativos y reforzar acciones preventivas al Armamento en la Población
 - Existen varias acciones que se han propuesto para reducir los impactos negativos del flujo de armas y la militarización en México y Estados Unidos:
- 1.2.8.g.** Legislacion de control de armas y fuentes de trabajo y nucleos de educacion y respeto por la libertad religiosa.
- 1.2.8.h.** El establecimiento de un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, a la libre determinación, a la autonomía y el derecho pleno al territorio. En particular, soluciones legislativas a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado en México reconociendo las particularidades que tiene para las personas y pueblos indígenas.
- 1.2.8.i.** Políticas de legalización/regulación de las drogas con enfoque de salud pública que pongan al centro a las personas consumidoras, reducción de daños y atención a las adicciones.

- 1.2.8.j.** Es poco probable que el aumento de la aplicación de la ley sobre drogas reduzca la violencia en el mercado de drogas. En cambio, la base de evidencia existente sugiere que la violencia armada y las altas tasas de homicidios pueden ser una consecuencia inevitable de la prohibición de las drogas y que interrumpir los mercados de drogas puede, paradójicamente, aumentar la violencia. En este contexto, y dado que la prohibición de drogas no ha reducido significativamente la oferta de drogas, se requerirán modelos regulatorios alternativos si se quiere reducir significativamente la oferta de drogas y la violencia en el mercado de drogas.
- 1.2.8.k.** Pasar a la regulación y legalización de las sustancias, implementar políticas de cuidados en el uso de sustancias, implementar talleres sobre la construcción de paz
- 1.2.8.l.** Tener leyes delimitadas respecto al tráfico de armas, perseguir y castigar a quienes trafican, tener incidencia con acciones de reconstrucción social e individual en las comunidades afectadas.
- 1.2.8.m.** Los gobiernos son muy ausentes a las personas en el diseño de política de drogas en México. Se deben crear canales de comunicación e incidencia más efectivos.
- 1.2.8.n.** Aprobación de ARMAS ACT por el Congreso EEUU para el control del tráfico y la exportación legal a México.
- 1.2.8.o.** Diseño e implementación de marco normativo que responsabilice a los propietarios e industrias de armas a nivel internacional por crímenes cometidos por sus armas.
- 1.2.8.p.** Modificar la Ley de Asistencia Extranjera (Foreign Assistance Act) de Estados Unidos para adecuar la secciones tituladas "Informe de la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos" (International Narcotics Control Strategy) y "Procedimientos de Certificación Anual" (Annual Certification Procedures) que han permitido a Estados Unidos condicionar a México a implementar políticas represivas y militarizadas en materia de política de drogas.
- 1.2.8.q.** Regular la producción de amapola en México para la producción de medicamentos esenciales para atender el dolor para ambas naciones y cesar las violaciones a derechos humanos cometidas contra comunidades cultivadoras.
- 1.2.8.r.** Impulsar modelos regulatorios de plantas y sustancias psicoactivas actualmente ilegalizadas desde una perspectiva de justicia transicional, que incluyan mecanismos contra la impunidad, reparación de daño y no repetición.
- 1.2.9.** **Participación Ciudadana, Educación y Prevención**
- 1.2.9.a.** Voz, presencia y propuestas civiles
- 1.2.9.b.** Mayor presupuesto para políticas públicas en atención al tejido social y que fortalezcan el salario digno
- 1.2.9.c.** Menos burocracia para educación y salud
- 1.2.9.d.** Personal con competencias culturales para la atención y que se encuentren sensibilizadas
- 1.2.9.e.** Seguridad estrategias de salud y seguridad, sin militarización
- 1.2.9.f.** Fondos para la atención psicoemocional de personas defensoras
- 1.2.9.g.** Salarios justos
- 1.2.9.h.** Conciencia Social de la colectividad
- 1.2.9.i.** Apoyo a las comunidades: Es necesario proporcionar apoyo a las víctimas de la violencia y a las comunidades más afectadas, mediante programas de desarrollo económico y social, así como medidas para mejorar la seguridad y la protección de los derechos humanos.
- 1.2.9.j.** La comunidad de prevención de la violencia armada puede aprender de las iniciativas exitosas de la salud pública para prevenir y reducir enfermedades infecciosas. Los mismos principios de las ciencias de la salud pública se pueden aplicar a la prevención de lesiones por balas y armas de fuego.
- 1.2.9.k.** Desde un enfoque de salud pública, existen varias acciones que se han propuesto para reducir los impactos negativos del flujo de armas y la militarización en México y Estados Unidos:

– Prevención de lesiones por armas de fuego: Es importante implementar medidas para prevenir lesiones y muertes relacionadas con armas de fuego, como programas de educación sobre el manejo seguro de armas, regulaciones para la venta y distribución de armas, y programas de intervención para personas que presenten riesgo de suicidio o violencia.

– Atención de víctimas de la violencia armada: Es necesario proporcionar atención médica y psicológica a las víctimas de la violencia armada, así como apoyo a sus familias. Esto incluye programas de atención ambulatoria y hospitalaria, así como servicios de orientación y apoyo psicológico.

1.2.9.l. Reducción de la demanda de drogas: Es necesario implementar programas de prevención y tratamiento para reducir la demanda de drogas y disminuir el tráfico de drogas ilegales. Esto incluye programas de educación sobre los peligros de las drogas, servicios de tratamiento y rehabilitación, y programas de reducción de daños para reducir las complicaciones relacionadas con el consumo de drogas.

1.2.9.m. Promoción de la salud mental: La violencia armada y el tráfico de drogas tienen un impacto significativo en la salud mental. Es necesario desarrollar programas para mejorar la salud mental y el bienestar de las comunidades afectadas, mediante servicios de orientación y apoyo psicológico, programas de prevención del suicidio y programas de intervención temprana.

1.2.9.n. Atención de las necesidades de las comunidades afectadas: Es importante identificar y atender las necesidades específicas de las comunidades afectadas por la violencia armada y el tráfico de drogas, mediante programas de desarrollo económico y social, mejoras en la infraestructura y servicios públicos, y programas para mejorar la seguridad y la protección de los derechos humanos.

1.2.9.o. Reducir los impactos negativos del flujo de armas y la militarización en México y Estados Unidos requiere la implementación de medidas que prevengan lesiones y muertes relacionadas con armas de fuego, proporcionen atención a las víctimas de la violencia armada.

1.2.9.p. Trabajo y acceso a la educación

1.2.9.q. Implementación de estrategias de mediano y largo plazo para la formación de generaciones que rechacen la droga, revertiendo los procesos culturales y sociales de adicción y dependencia.

1.2.9.r. Acuerdos de paz y combatir la trata de personas y generando acciones preventivas de drogas, así como asignar presupuesto para ello.

1.2.9.s. El diseño e implementación de una estrategia federal de atención a los conflictos de fondo que enfrentan las comunidades y que en muchos casos son el inicio de una dinámica sistemática de violaciones a sus derechos humanos como comunidades indígenas. Es urgente que se atiendan los conflictos agrarios respetando el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de los Pueblos Indígenas.

1.2.9.t. políticas de participación ciudadana inclusivas que enriquezcan la agenda de paz.

1.2.9.u. Fortalecimiento de las voces de las personas directamente afectadas por las políticas de drogas actuales, desde personas dedicadas al cultivo y la transformación de plantas y sustancias psicoactivas, hasta las personas dedicadas a la venta al menudeo o que consumen dichas plantas y sustancias.

1.2.9.v. Replicar diálogos de la sociedad civil y población afectada, con la finalidad de conformar canales para compartir vivencias, atender necesidades y aportar insumos para la construcción de políticas públicas alternativas.

1.2.9.w. Generación de acciones comunitarias interculturales en cada país según el contexto sobre la no violencia, derechos humanos, ejercicio de defensa, justicia restaurativa todo con perspectiva interseccional.

1.2.9.x. Atención competente de autoridades con apertura de espacio, rutas y acompañamiento directo en acciones a familiares en búsqueda, en caso de justicia, protocolos y mecanismos particulares, recursos presupuestales.

POR UNA REGIÓN DE DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN MÁS ALLÁ DE NACIONALIDADES, FRONTERAS E IDENTIDADES.

2.2.1. Justicia efectiva más allá de nacionalidades

- 2.2.1.a.** Derecho a vivir con dignidad sin ser esclavizado
- 2.2.1.b.** Una ruta migrante digna
- 2.2.1.c.** Atender la corrupción y detener la impunidad
- 2.2.1.d.** Reducir los fenómenos de violencia a través de una correcta estrategia judicial para combatir las organizaciones criminales y la formación adecuada de las fuerzas de policía y militares.
- 2.2.1.e.** Pasar del discurso a la verdadera defensa y protección de los DHs
- 2.2.1.f.** Trato justo y digno

2.2.1.g. Terminar con la esclavitud del siglo XXI

2.2.1.h. Desmantelamiento de redes de trata de personas

- 2.2.1.i.** Generar mecanismos transnacionales de justicia para dar seguimiento a los procesos judiciales desde el país de origen o destino, así como a los procesos de reparación, verdad y justicia, para las personas migrantes y sus familias.

2.2.1.j. No criminalización de la movilidad (rutas migratorias, transparencia de los procedimientos)

Desmilitarización y descriminalización de la migración

2.2.2.a. Dejar de criminalizar a los más vulnerables.

Para prevenir el desplazamiento forzado y proteger la vida de las personas en movilidad, es necesario que los gobiernos de México y Estados Unidos adopten políticas y acciones concretas. Una de las principales acciones que se pueden exigir a los gobiernos es la implementación de medidas para reducir la violencia armada y controlar el flujo de armas de fuego. En este sentido, el programa "Pathfinders for SDG16+" de la ONU, promueve el fortalecimiento de instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y la justicia, así como la cooperación entre países para combatir el tráfico ilegal de armas. Estas estrategias también incluyen la promoción de políticas de control de armas eficaces en todos los niveles, la prevención de la violencia y la protección de las víctimas, y la promoción de una cultura de no violencia.

2.2.2.c. Es necesario que los gobiernos de México y Estados Unidos adopten medidas para reducir la violencia armada, controlar el flujo de armas de fuego, mejorar las políticas de seguridad y justicia, y desarrollar programas de protección para las personas desplazadas. Estas acciones son esenciales para alcanzar el objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que busca promover la paz, la justicia y la seguridad para todas las personas.

2.2.2.d. No revisión de las carretera o en puntos de internación

2.2.2.e. Implementación de estrategias adecuadas y civiles de seguridad pública.

2.2.2.f. Desvincular el sistema de transporte público del servicio nacional para evitar el temor a la deportación.

Legislación, implementación o cancelación de acuerdos internacionales

2.2.3.a. Que las autoridades regularicen las condiciones de trabajo

2.2.3.b. Favorecer el desplazamiento protegido de las personas de un país a otro, sin obligarlas a rutas peligrosas e ilegales, sobre todo en casos de violencia.

2.2.3.c. Que el Senado de la República apruebe de manera inmediata la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que se encuentra congelada; Esto debe incluir la construcción e implementación de instrumentos jurídicos, administrativos, programáticos y de políticas públicas orientados a la prevención y atención

- integral de la problemática y la asignación y aseguramiento de recursos humanos, materiales y financieros públicos suficientes para garantizar su cumplimiento.
- 2.2.3.d.** El establecimiento de un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, a la libre determinación, a la autonomía y el derecho pleno al territorio.
- 2.2.3.e.** Con respecto a la implementación efectiva de los marcos normativos existentes, es prioritario que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones locales ejerzan su capacidad autónoma de reconocer y otorgar la calidad de víctimas a las personas desplazadas internas, sin que sea necesario presentar una denuncia penal o una recomendación de un organismo público de derechos humanos. También resulta imprescindible que estas instituciones hagan registros colectivos de personas desplazadas, con el fin de que las medidas de intervención y las eventuales reparaciones integrales del daño se brinden desde este enfoque colectivo.
- 2.2.3.f.** Cumplimiento de las leyes estatales vigentes en los estados de Chiapas y Guerrero, así como los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, y se establezcan procedimientos claros y accesibles para la solicitud de atención por parte de las instancias locales de atención integral al desplazamiento forzado interno.
- 2.2.3.g.** El respeto irrestricto a Todos los Derechos Humanos desde las Comunidades de origen la Migración y el Desplazamiento Forzado.
- 2.2.3.h.** La legalización de las drogas, que estados unidos atienda la crisis de armas que está viviendo y que se haga responsable del tráfico ilegal de armas, que realmente atienda su política pública interna y externa, que atienda la crisis humanitaria
- 2.2.3.i.** Eliminar barreras en el marco legal para acceder a la nacionalidad mexicana, de personas nacidas en otro país con madre o padre mexicano (articlar con GIE)
- 2.2.3.j.** Implementar las sentencias judiciales que mandatan reformas legislativas, como la derogación de los artículo 67 y 68 de la Ley de Migración
- 2.2.3.k.** Impulsar la ley de desplazamiento interno forzado, garantizando que sea acompañada de recursos y mecanismos de operación.
- 2.2.3.l.** Reconocimiento del derecho a identidad y documentación
- 2.2.3.m.** Permitir acceso a residencia.
- 2.2.3.n.** Eliminación de obstáculos de carácter burocrático. (procedimiento de asilo, migratorias)
- 2.2.3.o.** Exigir la aplicación de la ley en cuanto a desplazamiento forzado interno.
- 2.2.3.p.** Protección de las víctimas bajo la Ley General de Víctimas.
- 2.2.3.q.** Derogación por completo del título 42 y otros programas discrecionales de retorno a la frontera.
- 2.2.3.r.** Ejercicio total de derecho y acceso universal y gratuito a servicios básicos.
- 2.2.4.** Transparencia
- 2.2.4.a.** Acceso a la Información
- 2.2.4.b.** Transparencia en las políticas que impactan a México por ejemplo MPP, Título 42, que impactan el trabajo al interior en albergues, organizaciones.
- 2.2.4.c.** Acceso a la información
- 2.2.4.d.** Transparencia en las estaciones migratorias que involucre los derechos humanos
- 2.2.4.e.** Fortalecimiento del acceso a la información y rendición de cuentas.
- 2.2.6.** Atención gubernamental trasnacional, digna, con enfoque de derechos e inclusión para personas y familias migrantes, desplazadas, sujetas de protección internacional y retornadas
- 2.2.6.a.** Espacios de atención integral para las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad
- 2.2.6.b.** Personal con competencias culturales para la atención y que se encuentren sensibilizadas
- 2.2.6.c.** Mejorar las estrategias de acogida de acuerdo a un esquema de Derechos Humanos.
- Diseño e implementación de protocolos federales y locales para respuesta coordinada,

- inmediata y efectiva ante una denuncia de hechos violentos que requiere la extracción de personas en riesgo, que les resguarden y acompañen a la presentación de las denuncias que correspondan cuando se solicite y al registro como víctimas
- 2.2.6.d.** Es imperativo que el gobierno retome los estándares internacionales de asistencia humanitaria eficaz y eficiente, a partir de una respuesta oportuna, diferenciada, adecuada a las necesidades específicas de cada grupo de población afectado, de calidad, sostenida y de manera coordinada entre instancias públicas y no gubernamentales. Con el fin último de proteger y atender integralmente a esta población. Los gobiernos en sus diferentes niveles realicen las gestiones necesarias a fin de que las víctimas accedan a servicios médicos y acompañamiento psicosocial, con pertinencia cultural, en caso de ser necesarios.
- 2.2.6.e.** Que se orienten esfuerzos en el fortalecimiento de capacidades de las y los funcionarios públicos involucrados en la respuesta al desplazamiento interno para que cuenten con los conocimientos y capacidades técnicas necesarias, con base en los estándares internacionales en la materia, para que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, además de contar con intérpretes para las personas hablantes de lenguas indígenas.
- 2.2.6.f.** Labores de atención al tejido social para promover condiciones para la recepción, acogida e integración de las personas desplazadas; además de combate a impunidad, xenofobia, discriminación, etc.
- 2.2.6.g.** Políticas migratorias con respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes y fuera del paradigma de control militarizado. Políticas focalizadas en las comunidades vulnerables/vulneradas por la violencia criminal para retomar el control estatal e impulsar el desarrollo comunitario.
- 2.2.6.h.** Adopción de políticas y programas para prevenir el desplazamiento forzado, como la creación de mecanismos de alerta temprana, la implementación de programas de protección y asistencia para las personas desplazadas, y la promoción de programas de reubicación y reintegración.
- 2.2.6.i.** Implementación de una política pública que involucre a los tres niveles de gobierno, para prevenir y responder eficazmente a la problemática de desplazamiento forzado interno, que incluya como medidas de reparación integral el retorno seguro o la reubicación o readaptamiento en condiciones dignas y lo más parecidas posibles a las que existían previo al desplazamiento. Para ello, las instituciones del estado deben garantizar:
- Que la decisión de migrar sea voluntaria, para ello las autoridades federales y locales deben proporcionar información suficiente sobre las condiciones de seguridad y el contexto del lugar de retorno o reubicación.
- Que los tres niveles de gobierno ofrezcan garantías de seguridad, que no serán heridas o lesionadas en su integridad física y que sus bienes y propiedades no van a sufrir daño.
- 2.2.6.l.** Que las personas migrantes cuenten con salud, vivienda, educación, trabajo y servicios públicos. Con atención especial para las personas indígenas y las necesidades culturales que requieran a fin de facilitar el restablecimiento de los proyectos de vida y comunitarios.
- 2.2.6.m.** Estos derechos deben ser garantizados con recursos suficientes para brindar trato digno y no discriminatorio, que permita la inclusión en procesos sociales, económicos y culturales de los hogares retornados y reubicados.
- 2.2.6.n.** Políticas claras que coloquen en el centro a las personas y sus necesidades de protección, más allá de un entorno político u económico.
- 2.2.6.o.** Con el fin de que las autoridades puedan diseñar e implementar una respuesta adecuada y efectiva a la problemática, es necesario que se redoblen esfuerzos en materia de recolección, manejo y análisis de información y que, de manera permanente, se lleven a cabo análisis, estudios y diagnósticos provenientes de distintas fuentes de información como censos, encuestas, registros administrativos, entrevistas cualitativas a actores clave, entre otros, que permitan contar con información suficiente, apegada a la realidad local y actualizada

sobre el contexto y las particularidades de la situación de desplazamiento interno, así como sobre las características y necesidades de las personas desplazadas internas y de las comunidades afectadas por los desplazamientos.

- 2.2.6.p.** Homologación de los procesos administrativos entre EEUU y México. (Título 42)
- 2.2.6.q.** Eliminación de los oficios de salida de estación migratoria como único documento de identidad.
- 2.2.6.r.** Otorgamiento de estancia por razones humanitarias.
- 2.2.6.s.** No exigencia de la clave única de registro (CURP) para trámites bancarios.
- 2.2.6.t.** Implementación de la transversalidad y perspectiva de género en temas de desplazamiento interno forzado.
- 2.2.6.u.** Habilitación de albergues públicos y laicos del Estado para personas migrantes y desplazadas internas.
- 2.2.6.v.** Habilitación de albergues especializados para niños adolescentes, que funjan como espacios de cuidado que permitan la integración de sus cuidadores.
- 2.2.6.w.** Habilitación de espacios de atención a la salud mental
- 2.2.6.x.** Creación de redes de transporte seguro provisto por el gobierno, no criminalización de las rutas (empresas de transporte y CANAPAT).
- 2.2.6.y.** Otorgar insumos para la menstruación digna en todos los espacios con afluencia de personas en situación de movilidad.
- 2.2.6.z.** Claridad y facilitación de procesos administrativos
- 2.2.6_aa.** Acceso a la información clara, completa y culturalmente accesible sobre los procesos migratorios.
- 2.2.6.bb.** Provisión de espacio de espera dignos.
- 2.2.6.cc.** Homologación de criterios en términos de exigencia de documentos para personas.
- 2.2.6.dd.** Políticas destinadas al acceso a servicios básicos.
- 2.2.6.ee.** Capacitación en derechos humanos para servidores públicos y personas que tiene que ver con las personas en situación de movilidad.
- 2.2.6.ff.** Implementación de sueldos dignos para personas servidoras públicas encargadas del trato de las personas en situación de movilidad.
- 2.2.6.gg.** Incremento del presupuesto a COMAR y a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes para su funcionamiento efectivo.
- 2.2.6.hh.** Reglamentación de registros administrativos con finalidad clara, acompañada de políticas de protección de datos para las personas en situación de movilidad.
- 2.2.6.ii.** Igualdad de condiciones y derechos para las personas en situación de movilidad.
- 2.2.6.jj.** Oportunidades de integración laboral y reconocimiento de la diversidad en los planes de estudio para facilitar la integración de las personas en situación de movilidad.
- 2.2.6.kk.** Extrapolación de las experiencias locales a nivel nacional.
- 2.2.6.ll.** Facilitación de la obtención de títulos de propiedad individual o colectiva para proteger a las pertenencias de las personas forzadas a desplazarse.
- 2.2.7.** Derecho a quedarse
- 2.2.7.a.** Generar las condiciones dignas de vivir en nuestros territorios, presupuesto invertido en nuestras comunidades, libre tránsito y seguro, empleo, acciones preventivas y visibilidad de nuestras problemáticas.
- 2.2.7.b.** Fortalecimiento al campo, insumos y seguridad
- 2.2.7.c.** El respeto a los Derechos Humanos
- 2.2.7.d.** Reorientar el abordaje del tema de la seguridad pública y restablecimiento de la paz pública, con un enfoque integral de derechos humanos, que permita restablecer el estado de derecho en las comunidades donde impera la delincuencia e impunidad.
- 2.2.7.e.** Que se establezca una estrategia nacional de prevención enfocada en mitigar y eliminar los factores, condiciones y causas estructurales que están detrás o alrededor de los desplaza-

mientos internos, particularmente con los relacionados a la militarización de la seguridad pública, a la presencia de los grupos vinculados al narcotráfico, crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo, a la actuación criminal de instituciones del Estado mexicano como gobiernos municipales y estatales, fiscalías locales y regionales, a los conflictos agrarios y despojos territoriales, entre otros.

- 2.2.7.f.** El diseño e implementación de una estrategia federal de atención a los conflictos de fondo que enfrentan las comunidades y que en muchos casos son el inicio de una dinámica sistemática de violaciones a sus derechos colectivos como comunidades indígenas. Con atención a los conflictos agrarios y a aquellos donde intervienen empresas, especialmente del sector minero. Reconociendo la obligación del estado y las empresas para respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas.
- 2.2.7.g.** La adopción de medidas preventivas enfocadas a actuar de manera anticipada ante un desplazamiento latente o situaciones que puedan detonarlo, a fin de evitar que el riesgo se materialice, como la implementación de sistemas de alertas tempranas y evaluaciones de riesgo.
- 2.2.7.h.** Atención a las causas relacionadas con el desplazamiento (Desarme y desactivación de fuerzas involucradas en la persecución/ estatales y no estatales; así como modelos económicos de explotación de territorio así como el combate a la corrupción e impunidad a actores involucrados en las violencias) /Esto debe ser a nivel global para promover su impacto tanto en lo que pueden ser países de origen, tránsito y destino.
- 2.2.7.i.** Fortalecimiento de procesos de construcción de participación por la democracia a nivel de estados y en consecuencia, el fortalecimiento y reposicionamiento de organismos intergubernamentales ONU para vigilar y promover marcos internacionales de protección (acceso a protección internacional) operando en los países involucrados (origen, tránsito y destino)
- 2.2.7.j.** Salarios justos
- 2.2.7.k.** Posicionarse en contra del extractivismo imperialista hacia el sur global
- 2.2.7.l.** Atención a desastres naturales y catástrofes climáticas.
- 2.2.8.** **Educación y difusión para la empatía, tolerancia e integración**
- 2.2.8.a.** En materia de difusión de derechos, será fundamental que se elaboren y difundan campañas informativas a la población en general sobre el desplazamiento forzado y para que las personas desplazadas internas conozcan sus derechos y los mecanismos disponibles para acceder a ellos.
- 2.2.8.b.** Promoción del cuidado y no criminalización de actores humanitarios
- 2.2.9.** **Derechos y protección a defensores de personas migrantes**
- 2.2.9.a.** Que se reconozca públicamente el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y a garantizar la integridad física y protección de las personas que acompañan a víctimas de desplazamiento forzado.

POR UNA REGIÓN CON DESARROLLO SUSTENTABLE Y PLENO RESPETO A LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y EL TERRITORIO.

- Reclamo de lo legítimo para las comunidades
- Por el reconocimiento de los pueblos autóctonos como una Nación
- Recuperar la Memoria Histórica de los pueblos.
- Presencia de Intérpretes en diferentes aspectos de la vida cotidiana y para trámites
- Mecanismos para hacer llegar demandas a diversas instancias
- Disposición para colaborar como comunidad
- Recuperar la historia que ha sido negada
- Respeto al territorio y los recursos naturales desde la visión de los pueblos
- Reivindicación de la soberanía alimentaria y autonomía de nuestros pueblos, rescate de la semilla ancestral
- Defensa del Río Bravos en Ciudad Juárez
- Atender la corrupción y detener la impunidad
- Despenalización del uso de las plantas y sustancias
- Dejar de criminalizar a los más vulnerables.
- Las reformas legales de. Protección a los comunicólogos y sociedad, debe ser inmediatas.
 - Qué el Estado sea garante de la Declaración de los Defensores y cumple con la convencionalidad
- No existe una política específica para protegernos. Se trata, más bien, de un cambio de actitud por parte de las instituciones: dejar atrás este momento de ostracismo de la sociedad civil, devolviéndoles su lugar y función a las organizaciones, es el primer paso para que ya no nos sentamos solos. La soledad es el primer paso de la eliminación física y social de una persona.
- Acciones concretas del estado mexicano y de Estados Unidos que avalen nuestra lucha, pues nos ven como enemigos constantes, así como la eliminación de la corrupción en todos sus planes y programas de seguridad para nosotros – Respaldo total del Estado y cuerpos de seguridad
- Respeto a la dignidad y la lucha por los derechos
- RESPETO. RESPETO. Y RESPETO A SUS DERECHOS
- El establecimiento de un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, a la libre determinación, a la autonomía y el derecho pleno al territorio. En particular, soluciones legislativas a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado en México reconociendo las particularidades que tiene para las personas y pueblos indígenas.
- La creación de una estrategia federal contra la actuación criminal de instituciones del Estado mexicano como gobiernos municipales, gobiernos estatales, fiscalías locales y regionales. Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo.
- La protección efectiva de las comunidades bajo asedio a través de una política pública integral por medio de acciones de coordinación interinstitucionales que generen condiciones para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las comunidades deben contar con análisis de riesgo apropiados, con planes de protección acordados con ellas y que sean implementados en su totalidad.
- El Estado mexicano debe adoptar medidas suficientes para garantizar a las comunidades

indígenas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos condiciones para el acceso a la justicia. Para ellos serán necesarias medidas como:

- En los casos de homicidios, desaparición forzada y en cualquier caso que esté en riesgo la seguridad de las comunidades, es necesario que las fiscalías den seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes emitidas por las organizaciones de sociedad civil para evitar la impunidad que perpetúa la situación de violencia.
- La debida integración de carpetas de investigación que agoten todas las líneas de investigación en cada uno de los casos denunciados. Estos procesos deben ser informados a las víctimas y a sus familias a través de los medios culturalmente apropiados que sean necesarios. Respetando el debido proceso de los imputados, es necesario que sean señaladas y sentenciadas las personas responsables de las violaciones de derechos humanos y los delitos denunciados.
- El poder judicial deberá aplicar los controles de convencionalidad necesarios para garantizar la aplicación del estado de derecho en todos los ámbitos de su competencia. Se deben garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en los instrumentos internacionales aplicables en México, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía.
- El diseño e implementación de una estrategia federal de atención a los conflictos de fondo que enfrentan las comunidades y que en muchos casos son el inicio de una dinámica sistemática de violaciones a sus derechos humanos como comunidades indígenas. Es urgente que se atiendan los conflictos agrarios respetando el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de los Pueblos Indígenas.
- Combate a corrupción e impunidad
- Respeto y reconocimiento a labores por parte de sector público
- Cuidado de manejo de medios
- Cero impunidad ante las agresiones. Esclarecimiento de las personas perpetradoras de las mismas. Cese de la estigmatización de la labor periodística y de defensa por parte de las autoridades. Políticas para fortalecer la labor de las organizaciones, grupos y personas que se dedican a la defensa y al periodismo independiente.
- Perfeccionar los mecanismos de protección.
- Desde la sociedad civil organizada, la academia y el sector privado, es posible exigir a los gobiernos de México y Estados Unidos políticas y acciones específicas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y sus territorios. Algunas de las medidas que se pueden exigir incluyen:
 - Implementar medidas para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos: Esto puede incluir medidas de protección, tales como escoltas, sistemas de alerta temprana, y medidas de seguridad en las comunidades afectadas. Investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos: Es esencial garantizar que los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, incluyendo amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias, agresiones, y asesinatos, sean llevados ante la justicia.
 - Fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y la justicia: Es necesario fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y la justicia, para garantizar una respuesta eficaz a las violaciones a los derechos humanos.
 - Garantizar la libertad de prensa y la protección de periodistas: Es esencial garantizar que los periodistas puedan trabajar de manera segura y libre de represalias, y que se proteja su derecho a buscar y comunicar la verdad.

- Desarrollar programas de capacitación y educación para fomentar una cultura de respeto por los derechos humanos: Es necesario fomentar una cultura de respeto por los derechos humanos a través de programas de capacitación y educación para las fuerzas de seguridad, las autoridades judiciales y la sociedad en general.
- Fomentar la rendición de cuentas y la transparencia: Es importante fomentar la rendición de cuentas y la transparencia, mediante la promoción de mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar violaciones a los derechos humanos y recibir respuestas adecuadas.
- Además de estas medidas, también es importante que las políticas y acciones se enfoquen en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 16 "Paz, justicia y establecimiento de instituciones sólidas", que busca promover un ambiente de paz y seguridad, y establecer instituciones sólidas y eficaces para garantizar la protección de los derechos humanos.
- Que realmente existan mecanismos, protocolos e instituciones que cuiden y defiendan a las personas defensoras, que el estado sea garante de derechos y proteja la vida humana, en donde sea primordial atender a las comunidades afectadas, familias, defensores por sobre cualquier actor político e instituciones y empresas
- Respeto a los derechos humanos, protección estatal, garantías de seguridad – Primero, que se respeten y ejerzan los marcos internacionales de defensa de estas personas.

POR UNA REGIÓN CON IGUALDAD DE DERECHOS LABORALES

Demandas para el Gobierno de Estados Unidos sobre el acceso a derechos para trabajadoras y trabajadores migrantes

- a. Salarios justos
- b. Aumentar los inspectores e inspecciones de Cal/OSHA y de salud pública dentro de la industria de producción de alimentos.
- c. Hacer que los datos de agencias locales, estatales, y federales relacionados con la protección de trabajadores sean transparentes y accesibles al público.
- d. Urgen políticas públicas que se enfoquen en las condiciones laborales de los jornaleros indígenas, haciendo énfasis en las mujeres, adolescentes y niños, ya que las condiciones laborales no son las mismas que las de los hombres.
- e. Acceso a la salud, a una alimentación digna para los jornaleros
- f. Que el gobierno y los dueños se pongan en los zapatos del humilde
- g. Reforma migratoria integral e inclusiva que beneficiará a los trabajadores esenciales y sus familiares.
- h. Salarios dignos--que reflejan el hecho de que la industria agrícola de California es una industria multimillonaria--con beneficios profesionales, que incluyen permiso por enfermedad, discapacidad, maternidad y paternidad, planes de jubilación y horas extras para todos los campesinos, independientemente de su estatus migratorio.
- i. Acceso comprensivo a los programas de redes de seguridad financiados por el gobierno, incluyendo desempleo y asistencia de emergencias y desastres, que son fáciles de acceder, culturalmente inclusivos, y que no tienen requisitos onerosos.
- j. Creación de una nueva dependencia específica para trabajadores agrícolas que esté capacitada, compuesta de personal, y financiada para hacer cumplir todas las regulaciones de salud, higiene y seguridad en el lugar de trabajo agrícola, incluyendo COVID-19 y el humo de incendios forestales. En su forma actual, Cal / OSHA está demasiado centralizada y no funciona para los Campesinos Indígenas.
- k. Creación de una red de comités regionales de responsabilidad externa, con base en el condado, compuestos por Campesinos, organizaciones comunitarias y aliados, que puedan garantizar que esta nueva agencia estatal haga cumplir la ley para garantizar que los Campesinos tengan entornos de trabajo seguros y saludables y líneas directas de comunicación con quienes están encargados de hacer cumplir las normas de salud y seguridad al nivel del condado, estado, y del federal. Estos comités pueden promover las soluciones fundamentadas que ofrecen a los Campesinos Indígenas, que saben qué funciona y qué no.
- l. Acceso a atención médica de calidad, incluido el apoyo para la salud emocional, que sea cultural y lingüísticamente apropiado.
- m. Unidades garantizadas y aumentos de viviendas dignas, en buenas y seguras condiciones, con calefacción y aire acondicionado, electricidad en funcionamiento, plomería, lavandería, servicio de internet y áreas de recreación y juego, con espacio suficiente para todos en el hogar, a precios viables o tarifas subsidiadas para Campesinos residentes.
- n. Para lograr la justicia lingüística, todos los servicios en los entornos de trabajo, las escuelas, la atención médica, y otros entornos deben proporcionar interpretación o trabajar con personas que puedan brindar interpretación a las lenguas Indígenas. Debemos asegurarnos de que los Campesinos reciban capacitación e información sobre sus derechos como tra-

bajadores agrícolas. Información sobre salud, COVID-19, y seguridad ocupacional deben comunicarse a los Campesinos Indígenas de manera regular, oral, y en las lenguas que hablan. Las agencias estatales y locales deben financiar y contratar organizaciones que tengan la confianza de las comunidades Indígenas y que tengan personal que hable sus lenguas.

- o.** Los distritos escolares con poblaciones de Campesinos Indígenas necesitan más maestros, consejeros, enfermeras y recursos para apoyar a los niños y las familias. Necesitan personal que hable idiomas Indígenas para comunicar de manera eficaz la información vital. Los volantes no son un método eficaz para las comunidades Indígenas.
- p.** El estado debe de hacer más que distribuir tecnología a los estudiantes en tiempos de crisis. Todos los estudiantes deben tener acceso a Internet y otros equipos en sus hogares como un derecho básico. Las familias indígenas necesitan apoyo adicional para ayudar a sus hijos a maximizar el uso de estos recursos.

Demandas al Gobierno Mexicano para proteger a trabajadoras y trabajadores mexicanos

- q.** México: invertir de inmediato más recursos para hacer frente a la acumulación de votaciones de legitimación de contratos que deben realizarse antes de mayo.
- r.** México: Asignar más recursos al Departamento del Trabajo para garantizar la aplicación rigurosa del derecho a organizarse y para detener el acoso laboral por parte de la CTM y los empleadores
- s.** México: resolver la huelga de Notimex y trabajar con los periodistas para garantizar su seguridad.

Demandas al Gobierno de Estados Unidos para proteger a trabajadoras y trabajadores migrantes y estadounidenses

- t.** Abolir el programa H2-A que perjudica a los trabajadores agrícolas existentes y a los pequeños agricultores de EE. UU., abolir otros programas de trabajadores invitados temporales y, en su lugar, proporcionar residencia permanente: 'tarjetas verdes'.
- u.** Someter los acuerdos comerciales a revisiones periódicas por parte del Congreso para determinar si el acuerdo aumentó los salarios y mejoró las condiciones laborales en los países afectados.
- v.** Aumentar el salario mínimo federal a \$ 15.00 / hora.

Demandas a los Gobiernos de Estados Unidos y México para proteger los derechos de trabajadores y trabajadoras de la región

- w.** Que se renegocien los acuerdos comerciales existentes para eliminar las causas de desplazamiento.
- x.** Cancelación de nuevos acuerdos comerciales que desplacen a las personas o bajen el nivel de vida.
- y.** Prohibir la intervención militar de EE. UU. o la ayuda para apoyar acuerdos comerciales, políticas de ajuste estructural o reformas económicas de mercado.

Ambos Paises

- z.** Apoyo a empresas cooperativas y propiedad de los trabajadores incluyendo préstamos a bajo interés para la creación de empresas.
- aa.** Construir viviendas más asequibles y limitar los aumentos de alquiler

A REGION OF JUSTICE AND WITHOUT ARMED VIOLENCE

- 1.2.1.** **Promote and strengthen the focus on human rights and health in public safety**
- 1.2.1.a.** Combat regional violence with an emphasis on human rights
- 1.2.1.b.** Provide Human Rights training for Mexican National Guard personnel.
- 1.2.1.c.** Identify the organizational processes of communities that have successfully strengthened internal solidarity and recuperated traditional security measures. This is important because the flow of weapons contributes not only to militarization but also to state policies that seek to control territories for economic development, which then leads to criminal violence and activities.
- 1.2.1.d.** Recognize conflicts binationaly, as well as sectors that have been criminalized and marginalized as a result of conflict.
- 1.2.1.e.** Implement public health policies based on harm reduction and community integration for the use and regulation of plants and psychoactive substances.
- 1.2.1.f.** Identify safety conditions of human rights defenders, journalists, etc. Establish platforms to make this information available to Mexican and U.S. civil society, while protecting defenders' anonymity.
- 1.2.1.g.** Change the narrative so that we can talk about people who are victimized as opposed to figures and data without identities.
- 1.2.1.h.** Pressure public officials to be present and stand alongside groups and victims at truth and justice events and actions.
- 1.2.2.** **Gun Control**
- 1.2.2.a.** Move Congress to pass arms controls that identify who receives/uses weapons.
- 1.2.2.b.** Prohibition of assault rifles. Prohibition of weapon sales to persons or entities with criminal records. The state must be held accountable for violent and criminalizing actions that marginalize our people.
- 1.2.2.c.** It is not possible to control weapon distribution, but it is possible to regulate production and sales.
- 1.2.2.d.** Regulate companies that produce and sell weapons.
- 1.2.2.e.** Regulate the arms market in the United States.
- 1.2.2.f.** Establish measures that are informed by public health practices and epidemiology to curb the flow of illegal weapon distribution in order to reduce drug trafficking violence, including policies for the prohibition and confiscation of illegal weapons.
- 1.2.2.g.** Regulation of the illegal, criminal flow of guns and weapons.
- 1.2.2.h.** Prioritize attention to the distribution and flow of weapons.
- 1.2.2.i.** Implement measures to control the flow of illegal weapons, including the regulation of sales and distribution, strengthening of prohibition and confiscation policies, and identification and monitoring of illegal weapon transfers across borders.
- 1.2.2.j.** Implement measures for weapon registration, background checks, and the prohibition of specific arms and ammunition, as well as for early warning systems.
- 1.2.2.k.** Investigate and penalize Illegal gun dealerships in Mexico and the United States through measures such as current law and regulation enforcement, strengthened investigative capacities, and support for organizations combating the sale of illegal weapons.
- 1.2.2.l.** Implementation of effective actions to regulate the flow of arms in the U.S. and Mexico.
- 1.2.2.m.** Establish effective regulation and accountability for weapons.

- 1.2.2.n. Restore and carry out due diligence processes in relation to the monitoring of arms trafficking, demilitarization, arms registration, and other areas of regulation.
- 1.2.2.o. Expand the role of civil society in the processes for controlling and monitoring of weapons.
- 1.2.2.p. Implement post-delivery controls, including the monitoring of dispatched weapons, weapons parts, and ammunition.
- 1.2.2.q. Implement regulation mechanisms for weapon manufacturers.
- 1.2.3. **Begin demilitarization and increase citizen powers in security**
- 1.2.3.a. Take back the power that has been given to the military by transferring military responsibilities to civilians.
- 1.2.3.b. Gradual elimination of security forces, with exceptions in certain areas where there is sufficient justification.
- 1.2.3.c. Demilitarize/Disarm
- 1.2.3.d. We do not support that the military has control of the National guard until 2028.
- 1.2.3.e. End the war on drugs
- 1.2.3.f. Restructure the police at all levels and move towards having a competent civilian police force that can alleviate localized organized crime.
- 1.2.3.g. Demilitarize the fight against drug trafficking, which, in its current form, negatively impacts local security and human rights. Identify and investigate non-military approaches focusing on harm reduction to resolve drug trafficking problems, including establishing measures to strengthen civilian institutions and state governance and justice mechanisms.
- 1.2.3.h. Reduce the role, leadership, and financing of security companies/institutions in drug policy. Redirect resources towards educational, health, and cultural institutions.
- 1.2.3.i. Stop measuring the efficacy of the “war on drugs” simplistically with statistics on seizures and arrests. Replace these with indicators for guaranteeing the exercise of human rights by population in both countries.
- 1.2.3.j. Reject militarism in official narratives concerning drugs, public spaces, health, and safety.
- 1.2.3.k. Implement effective policies for the consumption of illegalized plants and psychoactive substances that do not involve criminalization and move towards comprehensive regulation that parts from a human rights and social justice perspective.
- 1.2.3.l. Do not militarize the protection of human rights.
- 1.2.3.m. Reduction of tensions at a national level.
- 1.2.3.n. Demilitarize.
- 1.2.3.o. Respect and legalize community policing and traditional communal security mechanisms.
- 1.2.3.p. Establish civilian command roles for the National Guard.
- 1.2.3.q. Respect the self-governance, decisions, and laws of Indigenous Peoples.
- 1.2.3.r. End violent repression of protests and demonstrations..
- 1.2.3.s. Remove all obstacles and hindrances in the exercise of the right to protest.
- 1.2.3.t. Deactivate all surveillance and espionage mechanisms.
- 1.2.3.u. Stop the harassment and criminalization of organized civil society groups/actors and journalists.
- 1.2.4. **Transparency**
- 1.2.4.a. Create transparency mechanisms in response to the fact that the Mexican military does not report or answer to any institution.
- 1.2.4.b. Citizens have the right to be informed about weapon dynamics in their country.
- 1.2.4.c. Transparency and accountability on the part of U.S. authorities and companies regarding the sale, production, and distribution of weapons in that country
- 1.2.4.d. Transparency and accountability on the part of Mexican authorities in relation to the regulation and monitoring of weapons that legally and illegally enter the country.

- 1.2.4.e.** Strengthening Institutions in Mexico and the United States is essential to address problems related to drug trafficking and armed violence. This includes measures to improve transparency and accountability, as well as to fight corruption.
- 1.2.4.f.** Reformulation of agreements and commitments related to a country's obligations to its population.
- 1.2.4.g.** Transparency and demarcation of responsibilities to combat corruption and impunity and the end of business arrangements with groups whose interests and operations are not in-line with the common good.
- 1.2.4.h.** Measures to improve transparency, accountability, and fight corruption.
- 1.2.4.i.** Transparency on the part of institutions/entities involved in the production of weapons, arm parts, and ammunition.
- 1.2.4.j.** Implementation of effective arms regulation that is transparent to end users.
- 1.2.4.k.** Pressure legislators to demand accountability from the National Defense Secretariat (SEDENA).
- 1.2.5**
- International Litigation**
- 1.2.5.a.** Monitor the Mexican government's lawsuit against U.S. arms producers for their contribution to arms trafficking.
- 1.2.6.** **Preserving memory, ensuring effective justice, and ending corruption**
- 1.2.6.a.** Justice for the Ayotzinapa 43
- 1.2.6.b.** Establish a prosecutor's office that actually dismantles criminal organizations through effective processes.
- 1.2.6.c.** Location of forcibly disappeared persons while they are alive
- 1.2.6.d.** Extradition of Tomás Zerón Lucio
- 1.2.6.e.** Stop corruption and impunity
- 1.2.6.f.** Carry out investigations and consequences for entities that have created a legal market for dangerous drugs.
- 1.2.6.g.** Revert to traditional crops and reparations for corresponding damages: Attain concrete and proportional aid for impacted farmers.
- 1.2.6.h.** Establish a fully autonomous prosecutor's office that is independent of the executive and legislative powers and is capable of effectively fighting organized crime. Explore the inclusion of the Prosecutor's Office into the Judiciary branch of government.
- 1.2.6.i.** Create a federal strategy to confront Mexican state institutions at the local, municipal, state, and federal levels in relation to impunity pacts and collusion with organized crime and paramilitaries groups.
- 1.2.6.j.** Effective protection for communities that are currently under siege to fully exercise their collective rights as Indigenous Peoples through comprehensive public policy involving inter-institutional coordination and action. Communities must have opportunities to carry out adequate risk analyses involving fully implementable protection plans.
- 1.2.6.k.** The Mexican State must adopt all necessary measures to guarantee that indigenous communities that have suffered human rights violations have access to justice, including:
- a.** Prompt follow-up and investigation by state prosecutors to criminal complaints made by the public and to urgent actions issued by civil society organizations and civilians, specially in cases of homicides, forced disappearance, and impending harm or risk to communities.
 - b.** Mechanisms to prevent impunity, which perpetuates violence.
 - c.** Properly maintained case files representing all lines of investigation for all reported cases. Victims and their families must be informed of all case processes through culturally/ socially appropriate means of communication.

- d. Respect for due process protocols. It is necessary that the accused be held responsible for human rights violations and crimes as determined through formal litigation and processes.
- e. Conventional judicial controls and regulations to guarantee the application of the rule of law in all applicable areas. The collective rights of indigenous peoples established by international instruments applicable to Mexico must be guaranteed, particularly with regard to the right to territory and autonomy.

- 1.2.6.l.** Create a binational truth commission possessing autonomy, financing, and trained personnel, to address the impacts of the war on drugs.
- 1.2.6.m.** Establish amnesty policies that enable release measures, pardons and social reinsertion initiatives with a human rights perspective for people accused, sentenced, and deprived of liberty for unwarranted crimes related to illegal plants and psychoactive substances.
- 1.2.6.n.** Create or facilitate dignified spaces for preserving historical memory related to serious human rights violations and State-committed crimes.
- 1.2.6.o.** Provide comprehensive reparation for State crimes.
- 1.2.6.p.** Reduce bureaucracy related to protocols and mechanisms for the Protection of Human Rights Defenders and Journalists.
- 1.2.6.q.** Provide effective access to justice and truth, as well as guarantees of non-repetition of rights violations for civil society, rights defenders, journalists, etc.
- 1.2.6.r.** Expand and strengthen mechanisms for the protection of human rights defenders and journalists, with a focus on territorial defense and community journalists.
- 1.2.6.s.** Eliminate impunity for State crimes.
- 1.2.6.t.** Investigate and monitor crime networks and corruption in the country.
- 1.2.6.u.** Provide effective, comprehensive legal resources for defenders involved in activism-related litigation.
- 1.2.6.v.** Respect the rights and abide by the wishes/decisions of relatives of forcibly disappeared persons.
- 1.2.7.** **Inter-institutional and binational cooperation for violence prevention**
- 1.2.7.a.** Maximize international cooperation, including the exchange of information, joint intervention and operational work related to the implementation of international agreements, impact reduction of armed violence, cooperation with the governments of Mexico and the United States, and the monitoring of the sale and trafficking of illegal arms between the two countries.
- 1.2.7.b.** Apply a comprehensive and collaborative approach involving different actors and sectors to reduce the negative impacts of arms flows and militarization. It is important to address both the underlying causes and the effects of drug-trafficking-related violence, and to consider and analyze policies, programs, and their implementation.
- 1.2.7.c.** Foment international dialogue and cooperation between the governments of Mexico, the United States, and the countries of Central America to address issues related to drug-trafficking and armed violence.
- 1.2.7.d.** Foment binational collaboration to implement arms control measures at border locations.
- 1.2.7.e.** Respect the sovereignty of each nation and support/refrain from hindering political processes related to drug policy that incorporates harm reduction, human rights, and social justice considerations.
- 1.2.7.f.** Establish binational cooperation agreements on drug policy that reject a warlike approach to combating persons involved in drug-trafficking and recognize the right to the free development of identities, prioritize health and education, and respect human rights.
- 1.2.7.g.** Increase participation of public educational, health, cultural, and welfare institutions in the design and implementation of drug policies.
- 1.2.7.h.** Establish identity data systems that record and analyze patterns according to vulnerability

- categories and monitor forced disappearances and other human rights violations in order to facilitate the identification of victims.
- 1.2.7.i.** Establish a fund dedicated to providing human rights supports.
- 1.2.7.j.** Strengthen inter/intra-institutional coordination.
- 1.2.7.k.** Develop competences of authorities tasked with establishing safe spaces and routes, accompaniment/monitoring work, searches for victims of forced disappearance, and developing protocols for delivering justice, aid/funding, and other functions.
- 1.2.7.l.** Establish protection measures, including an economic support fund, as well as systems for handling bureaucracy, and dealing with victimization.
- 1.2.8.** **Legislation and regulation**
- 1.2.8.a.** Regulation of cannabis. Elimination of the punitive policy of the system that has continued with the situation of repression. It is intended to provide opportunities to our communities through these initiatives. Users, producers, etc.
- 1.2.8.b.** Defense of the right to personality development
- 1.2.8.c.** Stop criminalizing the most vulnerable.
- 1.2.8.d.** Decriminalization of the use of plants and substances
- 1.2.8.e.** Education and legislation in US laws
- 1.2.8.f.** Improve regulatory frameworks and reinforce preventive actions against Weapons in the Population – There are several actions that have been proposed to reduce the negative impacts of the flow of arms and militarization in Mexico and the United States:
- 1.2.8.g.** Arms control legislation and job sources and education centers and respect for religious freedom.
- 1.2.8.h.** The establishment of a legal framework that guarantees full recognition of the collective rights of indigenous peoples as subjects of public law, to self-determination, autonomy and the full right to territory. In particular, legislative solutions to the humanitarian crisis of forced displacement in Mexico, recognizing the particularities it has for indigenous peoples and peoples.
- 1.2.8.i.** Policies for the legalization/regulation of drugs with a public health approach that puts consumers at the center, harm reduction and attention to addictions.
- 1.2.8.j.** Increased drug law enforcement is unlikely to reduce violence in the drug market. Instead, the existing evidence base suggests that gun violence and high homicide rates may be an inevitable consequence of drug prohibition and that disrupting drug markets may paradoxically increase violence. In this context, and given that drug prohibition has not significantly reduced drug supply, alternative regulatory models will be required if drug supply and violence in the drug market are to be significantly reduced.
- 1.2.8.k.** Move on to the regulation and legalization of substances, implement policies for care in the use of substances, implement workshops on building peace
- 1.2.8.l.** have delimited laws regarding arms trafficking, prosecute and punish those who traffic, have an impact with actions of social and individual reconstruction in the affected communities
- 1.2.8.m.** Governments are very absent from people in the design of drug policy in Mexico. More effective communication and advocacy channels must be created.
- 1.2.8.n.** Approval of the WEAPONS ACT by the US Congress for the control of traffic and legal export to Mexico.
- 1.2.8.o.** Design and implementation of a regulatory framework that holds gun owners and industries accountable at an international level for crimes committed by their weapons.
- 1.2.8.p.** Amend the United States Foreign Assistance Act to adapt the sections titled "International Narcotics Control Strategy Report" and "Annual Certification Procedures" that they have allowed the United States to condition Mexico to implement repressive and militarized policies in terms of drug policy.

- 1.2.8.q.** Regulate poppy production in Mexico for the production of essential medicines to treat pain for both nations and cease the human rights violations committed against farming communities.
- 1.2.8.r.** Promote regulatory models for plants and psychoactive substances currently illegal from a transitional justice perspective, which include mechanisms against impunity, damage repair and non-repetition.
- 1.2.9.** **1.2.9. Citizen Participation, Education and Prevention**
- 1.2.9.a.** Enact voice and presence and create civil proposals
- 1.2.9.b.** Increased funding for public policy focusing on safeguarding social fabrics and a dignified salary/wages
- 1.2.9.c.** Less bureaucracy limiting access to education and health services
- 1.2.9.d.** Culturally competent and trained staff providing public attention/services
- 1.2.9.e.** Generate health and security strategies without militarization
- 1.2.9.f.** Provide funding for mental health care for rights defenders
- 1.2.9.g.** Provide fair wages
- 1.2.9.h.** Recognize social consciousness grounded in community
- 1.2.9.i.** Support victims of violence and affected communities through economic and social development programs, as well as measures to improve security and protect human rights.
- 1.2.9.j.** Ensure that the gun violence prevention community learns from successful public health initiatives for preventing and reducing infectious disease. The principles of public health science can be applied to the prevention of firearm injuries.
- 1.2.9.k.** Implement measures that are informed by public health perspectives to prevent injuries and deaths caused by firearms, including education programs on the safe handling of weapons, regulations for the sale and distribution of weapons, and intervention programs for people who present a risk of suicide or violence.
- 1.2.9.l.** Reduce drug demand and illicit drug trafficking through the implementation of prevention and treatment programs, including education programs on the dangers of drugs, treatment, rehabilitation services as well as harm reduction programs related to drug use.
- 1.2.9.m.** Promote mental health and well-being in communities impacted by armed violence and drug trafficking through counseling and psychological support services, and programs for suicide prevention and early intervention.
- 1.2.9.n.** Address the specific needs of communities affected by armed violence and drug trafficking through improvements in infrastructure and public services, economic and social development programs, and security improvement and human rights protection programs.
- 1.2.9.o.** Reduce the negative impacts of the flow of arms and militarization in Mexico and the United States through measures to prevent firearm injuries and deaths and to provide care for victims.
- 1.2.9.p.** Generate work opportunities and increased access to education.
- 1.2.9.q.** Implement medium- and long-term strategies for forming new generations that do not engage in drug use; reverse the social processes that lead to drug addiction and dependency.
- 1.2.9.r.** Establish peace agreements, combat human trafficking, and carry out preventive drug actions/events; establish necessary funding for each.
- 1.2.9.s.** Design and implement a federal strategy to deal with the underlying problems impacting indigenous communities, which in many cases generate a dynamic of systematic human rights violations. Urgently address agrarian conflicts, making use of the national and international legal frameworks for the protection of the rights of Indigenous Peoples.
- 1.2.9.t.** Enact inclusive citizen participation policies that enrich the peace agenda.
- 1.2.9.u.** Amplify the voices of all people affected by active drug policies; including people engaged in the cultivation of drug-containing plants and psychoactive substances as well as people engaged in the sale and distribution of these.

- 1.2.9.v.** Expand the number and depth of dialogues between civil society and impacted populations in order to share experiences, meet needs, and provide inputs for the construction of alternative public policies.
- 1.2.9.w.** Generate intercultural and intersectional community actions in each country according to contexts of violence, human rights, advocacy, and restorative justice.
- 1.2.9.x.** Provide medical and psychological care for victims of armed violence, as well as support for their families, including outpatient and hospital care programs, counseling, and psychological support services.

A REGION WITH HUMAN RIGHTS AND INCLUSION BEYOND NATIONALITIES, BORDERS AND IDENTITIES.

2.2.1. Effective justice beyond nationalities

- 2.2.1.a.** Right to live with dignity without being enslaved
- 2.2.1.b.** A decent migrant route
- 2.2.1.c.** Address corruption and stop impunity
- 2.2.1.d.** Reduce the phenomena of violence through a correct judicial strategy to combat criminal organizations and the adequate training of the police and military forces.
- 2.2.1.e.** Going from discourse to the true defense and protection of DHs
- 2.2.1.f.** Fair and dignified treatment
- 2.2.1.g.** End 21st century slavery
- 2.2.1.h.** Dismantling of human trafficking networks
- 2.2.1.i.** Generate transnational justice mechanisms to monitor judicial processes from the country of origin or destination, as well as reparation, truth and justice processes for migrants and their families.
- 2.2.1.j.** Non-criminalization of mobility (migration routes, transparency of procedures)

Demilitarization and decriminalization of migration

- 2.2.2.a.** Stop criminalizing the most vulnerable.
- 2.2.2.b.** To prevent forced displacement and protect the lives of people on the move, it is necessary for the governments of Mexico and the United States to adopt concrete policies and actions. One of the main actions that can be required of governments is the implementation of measures to reduce armed violence and control the flow of firearms. In this sense, the UN "Pathfinders for SDG16+" program promotes the strengthening of institutions responsible for enforcing the law and justice, as well as cooperation between countries to combat illegal arms trafficking. These strategies also include the promotion of effective arms control policies at all levels, the prevention of violence and the protection of victims, and the promotion of a culture of non-violence.
- 2.2.2.c.** It is necessary for the governments of Mexico and the United States to adopt measures to reduce armed violence, control the flow of firearms, improve security and justice policies, and develop protection programs for displaced persons. These actions are essential to achieve goal 16 of the United Nations 2030 Agenda, which seeks to promote peace, justice and security for all people.

2.2.2.d. No inspection of the roads or at points of admission

2.2.2.e. Implementation of adequate and civil public safety strategies.

2.2.2.f. Detach the public transport system from the national service to avoid fear of deportation.

Legislation, implementation or cancellation of international agreements

2.2.3.a. That the authorities regulate working conditions

2.2.3.b. Promote the protected movement of people from one country to another, without forcing them to take dangerous and illegal routes, especially in cases of violence.

2.2.3.c. That the Senate of the Republic immediately approve the General Law to Comprehensively Prevent, Address, and Reparate Internal Forced Displacement, which is frozen; This must include the construction and implementation of legal, administrative, programmatic and public policy instruments aimed at the prevention and comprehensive care of the problem and the allocation and assurance of sufficient public human, material and financial resources to guarantee compliance.

- 2.2.3.d.** The establishment of a legal framework that guarantees full recognition of the collective rights of indigenous peoples as subjects of public law, to self-determination, autonomy and the full right to territory.
- 2.2.3.e.** With respect to the effective implementation of existing regulatory frameworks, it is a priority that the Executive Commission for Attention to Victims and the local Commissions exercise their autonomous capacity to recognize and grant victim status to internally displaced persons, without that it is necessary to file a criminal complaint or a recommendation from a public human rights body. It is also essential that these institutions make collective records of displaced persons, so that intervention measures and possible comprehensive reparations for the damage are provided from this collective approach.
- 2.2.3.f.** Compliance with state laws in force in the states of Chiapas and Guerrero, as well as the UN guiding principles of internal displacement, and clear and accessible procedures are established for requests for assistance by local authorities Comprehensive care for internal forced displacement.
- 2.2.3.g.** Unrestricted respect for all Human Rights from the Communities of origin, Migration and Forced Displacement.
- 2.2.3.h.** The legalization of drugs, that the United States address the arms crisis it is experiencing and that it take responsibility for illegal arms trafficking, that it really address its internal and external public policy, that it address the humanitarian crisis
- 2.2.3.i.** Eliminate barriers in the legal framework to access Mexican nationality, for people born in another country with a Mexican mother or father (articulate with GIE)
- 2.2.3.j.** Implement judicial rulings that mandate legislative reforms, such as the repeal of Articles 67 and 68 of the Migration Law.
- 2.2.3.k.** Promote the law on forced internal displacement, guaranteeing that it is accompanied by resources and operating mechanisms.
- 2.2.3.l.** Recognition of the right to identity and documentation
- 2.2.3.m.** Allow access to residence.
- 2.2.3.n.** Elimination of bureaucratic obstacles. (asylum procedure, immigration)
- 2.2.3.o.** Demand the application of the law regarding internal forced displacement.
- 2.2.3.p.** Protection of victims under the General Law of Victims.
- 2.2.3.q.** Complete repeal of Title 42 and other discretionary return-to-border programs.
- 2.2.3.r.** Full exercise of rights and universal and free access to basic services.
- 2.2.4.** Transparency
- 2.2.4.a.** Access to Information
- 2.2.4.b.** Transparency in policies that impact Mexico, for example MPP, Title 42, that impact work inside shelters, organizations.
- 2.2.4.c.** Access to information
- 2.2.4.d.** Transparency in migration stations that involves human rights
- 2.2.4.e.** Strengthening access to information and accountability.
- 2.2.6.** Transnational, dignified government attention, with a focus on rights and inclusion for migrants, displaced persons and families, subject to international protection and returnees
- 2.2.6.a.** Comprehensive care spaces for the most vulnerable communities
- 2.2.6.b.** Personnel with cultural competencies for care and who are sensitized
- 2.2.6.c.** Improve reception strategies according to a Human Rights scheme.
- Design and implementation of federal and local protocols for a coordinated, immediate and effective response to a complaint of violent acts that requires the extraction of people at risk, to protect them and accompany them to the presentation of the corresponding complaints when requested and to the registration as victims

- 2.2.6.d.** It is imperative that the government resume international standards for effective and efficient humanitarian assistance, based on a timely, differentiated response, appropriate to the specific needs of each affected population group, of quality, sustained, and in a coordinated manner between public and non-public entities. governmental. With the ultimate goal of protecting and fully caring for this population. Governments at different levels take the necessary steps so that victims have access to medical services and psychosocial support, with cultural relevance, if necessary.
- 2.2.6.e.** and That efforts be focused on strengthening the capacities of public officials involved in the response to internal displacement so that they have the necessary knowledge and technical capacities, based on international standards on the matter, so that they can adequately perform their functions. , in addition to having interpreters for people who speak indigenous languages.
- 2.2.6.f.** Care work for the social fabric to promote conditions for the reception, reception and integration of displaced persons; in addition to combating impunity, xenophobia, discrimination, etc.
- 2.2.6.g.** Migration policies with respect for the human rights of all migrants and outside the paradigm of militarized control. Policies focused on vulnerable/vulnerable communities by criminal violence to regain state control and promote community development.
- 2.2.6.h.** Adoption of policies and programs to prevent forced displacement, such as the creation of early warning mechanisms, the implementation of protection and assistance programs for displaced persons, and the promotion of relocation and reintegration programs.
- 2.2.6.i.** Implementation of a public policy that involves the three levels of government, to prevent and respond effectively to the problem of internal forced displacement, which includes safe return or relocation or resettlement as comprehensive reparation measures in dignified conditions and as similar as possible those that existed prior to displacement. To do this, state institutions must guarantee:
- 2.2.6.j.** That the decision to migrate be voluntary, for this the federal and local authorities must provide sufficient information about the security conditions and the context of the place of return or relocation.
- 2.2.6.k.** That the three levels of government offer security guarantees, that they will not be hurt or injured in their physical integrity and that their goods and properties will not suffer damage.
- 2.2.6.l.** That migrants have health, housing, education, work and public services. With special attention for indigenous people and the cultural needs they require in order to facilitate the restoration of life and community projects.
- 2.2.6.m.** These rights must be guaranteed with sufficient resources to provide dignified and non-discriminatory treatment, which allows the inclusion of returned and relocated households in social, economic and cultural processes.
- 2.2.6.n.** Clear policies that place people and their protection needs at the center, beyond a political or economic environment
- 2.2.6.o.** In order for the authorities to be able to design and implement an adequate and effective response to the problem, it is necessary that efforts be redoubled in terms of information collection, management, and analysis, and that analysis, studies, and studies be carried out on a permanent basis. and diagnoses from different sources of information such as censuses, surveys, administrative records, qualitative interviews with key actors, among others, that allow for sufficient information, attached to the local reality and updated on the context and particularities of the displacement situation. internally, as well as on the characteristics and needs of internally displaced persons and communities affected by displacement.
- 2.2.6.p.** Homologation of administrative processes between the US and Mexico. (Title 42)
- 2.2.6.q.** Elimination of immigration station exit documents as the only identity document.

- 2.2.6.r.** Granting of stay for humanitarian reasons.
- 2.2.6.s.** No requirement of the unique registration key (CURP) for banking procedures.
- 2.2.6.t.** Implementation of mainstreaming and a gender perspective in issues of forced internal displacement.
- 2.2.6.u.** Enabling state public and secular shelters for migrants and internally displaced persons.
- 2.2.6.v.** Enabling specialized shelters for adolescent children, which serve as care spaces that allow the integration of their caregivers.
- 2.2.6.w.** Enabling mental health care spaces
- 2.2.6.x.** Creation of safe transportation networks provided by the government, non-criminalization of routes (transport companies and CANAPAT).
- 2.2.6.y.** Provide supplies for dignified menstruation in all spaces with an influx of people on the move.
- 2.2.6.z.** Clarity and facilitation of administrative processes
- 2.2.6_aa.** Access to clear, complete and culturally accessible information on migration processes.
- 2.2.6_bb.** Provision of decent waiting space.
- 2.2.6_cc.** Homologation of criteria in terms of document requirements for people.
- 2.2.6_dd.** Policies for access to basic services.
- 2.2.6_ee.** Human rights training for public servants and people who have to do with people on the move.
- 2.2.6_ff.** Implementation of living wages for peopleservants public responsible for the treatment of people in a situation of mobility.
- 2.2.6_gg.** Budget increase to EAT and to the procuratorate offices for the protection of children and adolescents for their effective operation.
- 2.2.6_hh.** Regulation of administrative records with a clear purpose, accompanied by data protection policies for people on the move.
- 2.2.6_ii.** Equal conditions and rights for people on the move.
- 2.2.6_jj.** Opportunities for labor integration and recognition of diversity in study plans to facilitate the integration of people on the move.
- 2.2.6_kk.** Extrapolation of local experiences to the national level.
- 2.2.6_ll.** Facilitation of obtaining individual or collective property titles to protect the belongings of people forced to move.
- 2.2.7.** **The right to stay**
- 2.2.7.a.** Generate decent living conditions in our territories, budget invested in our communities, free movement and insurance, employment, preventive actions and visibility of our problems
- 2.2.7.b.** Strengthening the field, supplies and security
- 2.2.7.c.** Respect for Human Rights
- 2.2.7.d.** Reorient the approach to the issue of public security and restoration of public peace, with a comprehensive approach to human rights, which allows the restoration of the rule of law in communities where crime and impunity prevail.
- 2.2.7.e.** That a national prevention strategy be established focused on mitigating and eliminating the factors, conditions, and structural causes behind or surrounding internal displacement, particularly those related to the militarization of public security, the presence from groups linked to drug trafficking, organized crime and groups heirs to paramilitaries, to the criminal actions of Mexican State institutions such as municipal and state governments, local and regional prosecutors, agrarian conflicts and territorial dispossession, among others.
- 2.2.7.f.** The design and implementation of a federal strategy to deal with underlying conflicts faced by communities and which in many cases are the beginning of a systematic dynamic of violations of their collective rights as indigenous communities. With attention to agrarian conflicts and those where companies intervene, especially in the mining sector. Recognizing the obligation of the state and companies to respect the right to prior, free and informed consent of Indigenous Peoples.

- 2.2.7.g.** The adoption of preventive measures focused on acting in advance in the event of latent displacement or situations that could trigger it, in order to prevent the risk from materializing, such as the implementation of early warning systems and risk assessments.
- 2.2.7.h.** Attention to causes related to displacement (Disarmament and deactivation of forces involved in the persecution/state and non-state; as well as economic models of plundering of territory as well as the fight against corruption and impunity for actors involved in violence) / This must be at a global level to promote its impact in countries of origin, transit and destination.
- 2.2.7.i.** Strengthening of processes for building participation for democracy at the state level and consequently, the strengthening and repositioning of UN intergovernmental organizations to monitor and promote international protection frameworks (access to international protection) operating in the countries involved (origin, transit and destination)
- 2.2.7.j.** Fair wages
- 2.2.7.k.** Stand against imperialist extractivism to the global south
- 2.2.7.l.** Attention to natural disasters and climatic catastrophes.
- 2.2.8.** **Education and dissemination for empathy, tolerance and integration**
- 2.2.8.a.** Regarding the dissemination of rights, it will be essential to prepare and disseminate information campaigns to the general population on forced displacement and for internally displaced persons to know their rights and the mechanisms available to access them.
- 2.2.8.b.** Promotion of care and non-criminalization of humanitarian actors
- 2.2.9.** **Rights and protection of defenders of migrants**
- 2.2.9.a.** That the work of human rights defenders be publicly recognized and that the physical integrity and protection of the people who accompany victims of forced displacement be guaranteed.

A REGION WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND FULL RESPECT FOR TERRITORIES AND FOR THE RIGHTS OF NATURE

- Claim of what is legitimate for the communities
- For the recognition of autochthonous peoples as a Nation
- Recover the Historical Memory of the towns
- Presence of interpreters in different aspects of daily life and for procedures
- Mechanisms for submitting demands to various instances
- Willingness to collaborate as a community
- Recover the history that has been denied
- Respect for the territory and natural resources from the vision of the peoples
- Demand for food sovereignty and autonomy of our peoples, rescue of the ancestral seed
- Defense of the Rio Brav in Ciudad Juarez
- Address corruption and stop impunity
- Decriminalization of the use of plants and substances
- Stop criminalizing the most vulnerable.
- The legal reforms of. Protection of communication scientists and society must be immediate – That the State be guarantor of the Declaration of the Defenders and comply with conventionality
- There is no specific policy to protect us. It is, rather, a change in attitude on the part of the institutions: leaving behind this moment of ostracism from civil society, restoring their place and function to organizations, is the first step so that we no longer feel alone. Loneliness is the first step in the physical and social elimination of a person.
- The actions of civil resistance and non-cooperation, and civil disobedience, of the relatives of the disappeared have been key to advancing truth and justice
- Concrete actions of the Mexican state and states
- United to endorse our fight, since they see us as constant enemies, as well as the elimination of corruption in all their security plans and programs for us – Full support of the State and security forces
- Respect for dignity and the fight for rights
- I RESPECT. I RESPECT. AND RESPECT YOUR RIGHTS
- The establishment of a legal framework that guarantees full recognition of the collective rights of indigenous peoples as subjects of public law, to self-determination, autonomy and the full right to territory. In particular, legislative solutions to the humanitarian crisis of forced displacement in Mexico, recognizing the particularities it has for indigenous peoples and peoples.
- The creation of a federal strategy against the criminal actions of institutions of the Mexican State such as municipal governments, state governments, local and regional prosecutors.
- Action must be taken to break the impunity pact and the collusion of state institutions with organized crime and groups that are heirs to paramilitaries.
- The effective protection of communities under siege through a comprehensive public policy through inter-institutional coordination actions that create conditions for the full exercise of the collective rights of indigenous peoples. Communities must have appropriate risk analysis, with protection plans agreed with them and fully implemented.

- The Mexican State must adopt sufficient measures to guarantee the indigenous communities that have been victims of human rights violations conditions for access to justice. For them, measures such as:
- In the cases of homicides, forced disappearance and in any case that the security of the communities is at risk, it is necessary for the prosecutors to promptly follow up on criminal complaints, public complaints and urgent actions issued by civil society organizations. to avoid the impunity that perpetuates the situation of violence.
- The proper integration of criminal cases that exhaust all lines of investigation in each of the reported cases. These processes must be informed to the victims and their families through the culturally appropriate means that are necessary.
- Respecting the due process of the accused, it is necessary that the persons responsible for the human rights violations and the crimes denounced be identified and sentenced. The judiciary must apply the conventionality controls necessary to guarantee the application of the rule of law in all areas of its competence. The collective rights of indigenous peoples established in the international instruments applicable in Mexico must be guaranteed, particularly with regard to the right to territory and autonomy.
- The design and implementation of a federal strategy to deal with underlying conflicts faced by the communities and which in many cases are the beginning of a systematic dynamic of violations of their human rights as indigenous communities. It is urgent that agrarian conflicts be addressed while respecting the national and international legal framework for the protection of the rights of Indigenous Peoples.
- Fight against corruption and impunity
- Respect and recognition of work by the public sector
- Media Handling Care
- Zero impunity for attacks. Clarification of the perpetrators of the same. Cessation of the stigmatization of journalistic and defense work by the authorities. Policies to strengthen the work of organizations, groups and individuals dedicated to defense and independent journalism.
- Improve protection mechanisms.
- From organized civil society, academia, and the private sector, it is possible to demand specific policies and actions from the governments of Mexico and the United States to protect human rights defenders and their territories. Some of the measures that may be required include:
- Implement measures to guarantee the safety of human rights defenders: This may include protection measures, such as escorts, early warning systems, and security measures in affected communities.
- Investigate and punish violations of the human rights of human rights defenders: It is essential to guarantee that the perpetrators of human rights violations, including threats, harassment, arbitrary detentions, assaults, and murders, are brought to justice.
- Strengthen the institutions in charge of enforcing the law and justice: It is necessary to strengthen the institutions in charge of enforcing the law and justice, to guarantee an effective response to human rights violations.
- Guaranteeing freedom of the press and the protection of journalists: It is essential to guarantee that journalists can work safely and free from reprisals, and that their right to seek and communicate the truth is protected.
- Develop training and education programs to foster a culture of respect for human rights: It is necessary to foster a culture of respect for human rights through training and education programs for security forces, judicial authorities, and society in general. .
- Promote accountability and transparency: It is important to promote accountability and

transparency by promoting mechanisms so that citizens can report human rights violations and receive appropriate responses.

- In addition to these measures, it is also important that policies and actions focus on meeting the sustainable development goals, especially goal 16 "Peace, justice and the establishment of strong institutions", which seeks to promote an environment of peace and security, and establish strong and effective institutions to guarantee the protection of human rights.
- That there really be mechanisms, protocols and institutions that care for and defend defenders, that the state be a guarantor of rights and protect human life, where it is essential to attend to affected communities, families, defenders above any political actor and institutions and companies
- Respect for human rights, state protection, security guarantees – First, that international defense frameworks for these people be respected and exercised.

A REGION WITH EQUAL LABOR RIGHTS.

- a. Fair wages
- b. Increase Cal/OSHA and public health inspectors and inspections within the food manufacturing industry.
- c. Make data from local, state, and federal agencies related to worker protection transparent and accessible to the public.
- d. Public policies that focus on the working conditions of indigenous day laborers are urgently needed, with emphasis on women, adolescents and children, since working conditions are not the same as those of men.
- e. Access to health, decent food for day laborers
- f. That the government and the owners put themselves in the shoes of the humble
- g. Comprehensive and inclusive immigration reform that will benefit essential workers and their families.
- h. Living wages--reflecting the fact that California's agricultural industry is a multi-billion dollar industry--with professional benefits, including sick leave, disability, maternity and paternity leave, retirement plans, and overtime for all Farm Workers, regardless of your immigration status.
- i. Comprehensive access to government-funded safety net programs, including unemployment and emergency and disaster assistance, that are easy to access, culturally inclusive, and have no burdensome requirements.
- j. Creation of a new farmworker-specific agency that is trained, staffed, and funded to enforce all agricultural workplace health, hygiene, and safety regulations, including COVID-19 and wildfire smoke. In its current form, Cal/OSHA is too centralized and doesn't work for Indian Farm Workers.
- k. Creation of a network of county-based regional external accountability committees, made up of Farm Workers, community organizations and allies, who can ensure this new state agency enforces the law to ensure Farm Workers have safe and healthy work environments and hotlines of communication with county, state, and federal health and safety enforcers. These committees can promote the informed solutions they offer to Indigenous Farmers, who know what works and what doesn't.
- l. Access to quality health care, including emotional health support, that is culturally and linguistically appropriate.
- m. Guaranteed units and increases in decent housing, in good and safe condition, with heating and air conditioning, working electricity, plumbing, laundry, internet service, and recreation and play areas, with enough space for everyone in the household, at viable prices or subsidized rates for resident farmers.
- n. To achieve language justice, all services in workplaces, schools, health care, and other settings must provide interpretation or work with people who can provide interpretation into Indigenous languages. We must ensure that Farm Workers receive training and information about their rights as farmworkers. Information about health, COVID-19, and occupational safety must be communicated to Indigenous Farmers on a regular basis, orally, and in the languages they speak. State and local agencies should fund and contract with organizations that are trusted by Indigenous communities and have staff who speak their languages.

- o.** School districts with Indian Farmer populations need more teachers, counselors, nurses, and resources to support children and families. They need staff who speak Indigenous languages to effectively communicate vital information. Flyers are not an effective method for Indigenous communities.
 - p.** The state must do more than distribute technology to students in times of crisis. All students must have access to the Internet and other equipment in their homes as a basic right. Indigenous families need additional support to help their children maximize the use of these resources.

Mexico

- q.** Mexico: immediately invest more resources to deal with the backlog of votes to legitimize contracts that must take place before May.
 - r.** Mexico: Allocate more resources to the Department of Labor to ensure rigorous enforcement of the right to organize and to stop workplace harassment by the CTM and employers
 - s.** Mexico: resolve the Notimex strike and work with journalists to ensure their safety

US

- t. Abolish the H2-A program that hurts existing farmworkers and small farmers in the US, abolish other temporary guest worker programs, and instead provide permanent residency – 'green cards'.
 - u. Subject trade agreements to periodic review by Congress to determine whether the agreement raised wages and improved working conditions in affected countries.
 - v. Increase the federal minimum wage to \$15.00/hour

Binational (or Trinational) Trade Agreements

- w. What Existing trade agreements are renegotiated to eliminate the causes of displacement.
 - x. Cancellation of new trade agreements that displace people or lower living standards.
 - y. Prohibit US military intervention or aid to support trade agreements, structural adjustment policies, or market economic reforms

Both Countries

- z. Support for cooperative and worker-owned businesses including low-interest loans for start-ups
 - aa. Build more affordable housing and limit rent increases



MPPJ
MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS
POR LA PAZ Y LA JUSTICIA



**CUMBRE POR
LA PAZ**

peacesummit2023.org